

AGOSTO 28 DE 1919

39. REUNION — 35. Sesión Ordinaria

PRESIDENCIA DEL SEÑOR D. ARTURO GOYENECHE

DIPUTADOS PRESENTES: Agote Luis, Aldao Ricardo, Anquín Ireneo de, Arámburu Juan B., Arancibia Rodríguez A., Aranda Macedonio, Aráoz Miguel A., Araya Rogelio, Atencio Juan V., Avellaneda Nicolás A., Becú Carlos A., Beró Francisco, Bermúdez Manuel A., Berrondo Valentín, Bravo Mario, Bunge Augusto, Breard Eugenio E., Cabrera Aníbal, Camaño Melitón, Caracoeche Pedro, Carrasco Alejandro M., Casás José O., Cordero Octavio, Cornet Pedro L., Costa Julio A., Daneri Luis M., Dickmann Enrique, Escobar Adrián C., Fernández Jacinto, Ferreyra (hijo) Andrés, Galíndez Francisco R., Garat Damián P., Gatica Teófilo I., Gibert Pedro F., Goyeneche Arturo, Hernández Diógenes, Hernández Sabá Z., Isnardi Arturo, Justo Juan B., Lagos Luuro, Lauracena Mireul, Lehmann Guillermo, Martínez Enrique, Martínez Zuviria Gustavo, Massa Arturo H., Melo Carlos F., Méndez Casariego Alberto, Molina Víctor M., Moreno J. Alejandro, Moreno (hijo) Rodolfo, Mouesca Eduardo M., O'Farrell Juan, Oliva Moisés J., Padilla Eduardo, Padilla Ernesto E., Pagés Pedro T., Pérez Virasoro E., Puch Angel E., Quiroga Marcial V., Raffo de la Reta Julio C., Repetto Nicolás, Rúa Francisco A., Rougés León, Sánchez Bustamante T., Sánchez Sorondo Matías G., Solanet Pedro, Solari Benjamín T., Tamborini José P., Tomaso Antonio de, Usandivaras Agustín, Vaca Narvaja Jesús, Valle Delfor del, Vera Octaviano S., Vergara Valentín, Vidart Roberto, Videla Horacio C., Villarroel Agustín J., Yolde Luuro. DESPUÉS DE HORA: Arce Jose, Avellaneda Marco Aurelio, Barceló Alberto, Ferrarotti Juan Luis, Maidana Julián, Martínez Jose María, Mosca Enrique M., Rodríguez Alfredo, Rodríguez Jorge Raúl. DIPUTADOS AUSENTES: CON LICENCIA: Cáceres Manuel C., Carosini Alberto H., Gallegos Moyano Carlos, Garro Allende Juan E., Jaramillo José M., Montes José Antonio, Pérez José E., Remonda Mingrand F., Robin Castro Napoleón, Santamarina Antonio, Sosa Leopoldo. CON AVISO: Cabrera Aníbal, Davel Ricardo J., González José Antonio, Zafzar José María. SIX AVISO: Carranza Wenceslao C., Cornejo Julio, Corvalán Santiago E., Demaria (hijo) Mariano, Iriondo Néstor de, Jiménez Beltrán Dámaso, Leguizamón Arturo, Pradere Carlos M., Rodríguez Carlos J., Rubilar Francisco.

SUMARIO

- 1.—Apruébase el acta de la sesión de ayer.
- 2.—El señor presidente recuerda a la honorable cámara que en la sesión próxima *corresponde* nombrar *presidente* de la república para el caso de acefalía.
- 3.—Asuntos entrados.
- 4.—Proyecto de ley de los señores diputados J. C. Raffo de la Reta y doctor Alejandro Carrasco *sobre prórroga* de las pensiones graciables vencidas en 1918 y que vencen en 1919.
- 5.—Proyecto de ley de varios señores diputados con fundamentos del doctor Alejandro Carrasco, por el que se *prorroga* la *pensión* de la señora Dolores Islas de Juliáñez y las señoritas María Dolores y María Elvira Juliáñez Islas.
- 6.—Proyecto de ley de varios señores diputados con fundamentos de don Agustín J. Villarroel, por el que se *manda* expropiar 30.000 hectáreas en las inmediaciones de las cataratas del Igua-zú para *parque nacional*, *pueblo* y *colonia* *militar* y *civil*.
- 7.—Licencia para faltar a sesiones conce-

dida al señor diputado don J. E. Garro Allende.

- 8.—Renuncia aceptada del señor diputado doctor J. Alejandro Moreno de miembro de la comisión especial investigadora de los "trusts".
- 9.—Intégrase la comisión de códigos.
- 10.—Consideración sobre tablas y aprobación del despacho de la comisión de negocios constitucionales en el pedido del señor juez federal de sección con motivo de la *querrela iniciada por el señor procurador fiscal* contra el señor diputado Rodolfo Moreno (hijo).
- 11.—Continúa la consideración del despacho de la comisión de legislación en el proyecto de ley del señor diputado doctor Luis Agote sobre *protección* de los menores abandonados y delincuentes.
- 12.—Indicación del señor diputado doctor Marco Aurelio Avellaneda a fin de que se invite al señor ministro de hacienda a concurrir a la discusión del proyecto de modificaciones de la *carta orgánica* del Banco Hipotecario Nacional.
- 13.—Pregunta del señor diputado doctor Víctor M. Molina, respecto del despa-

cho del proyecto de ley que es autor sobre derogación de la ley que mandó construir la avenida de norte a sur.

- 14.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado doctor Víctor M. Molina por el que se deroga la ley número 8855 que autorizó la apertura de la avenida de norte a sud.
- 15.—Termina la consideración del proyecto de ley sobre protección de los menores abandonados y delincuentes.
- 16.—Mociones pendientes: del señor diputado doctor Antonio de Tomaso para tratar la orden del día número 86; del señor diputado doctor Luis Agote para tratar inmediatamente el despacho relativo a la carta orgánica del Banco Hipotecario Nacional.

—En Buenos Aires, a 28 de agosto de 1919, siendo las 3 p.m., ocupan sus asientos en el recinto los señores diputados en quórum legal.

1

ACTA

Sr. Presidente (Goyeneche). — queda abierta la sesión con asistencia de 62 señores diputados en el recinto.

Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Hago indicación para que se suprima la lectura y se dé por aprobada.

Sr. Avellaneda (N. A.) — Después de la discusión habida en la sesión anterior sobre la realizada el viernes, conviene que se dé lectura del acta.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Muy bien; se va a leer.

Leída una parte del acta:

Sr. Avellaneda (N. A.) — Habiéndose leído la parte pertinente, se puede suprimir la lectura del resto del acta y darse por aprobada.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Habiendo asentimiento, así se hará.

2

PRESIDENTE PARA EL CASO DE ACEFALIA

Sr. Presidente (Goyeneche). — La presidencia recuerda a los señores diputados que, de acuerdo con la ley respectiva, en la sesión de mañana corresponderá nombrar presidente de la república para caso de acefalía.

3

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

Despacho de comisión

LEGISLACIÓN:

En el proyecto del señor diputado Araya sobre fomento del scoutismo.

NEGOCIOS CONSTITUCIONALES:

En la comunicación del juez federal, doctor Jantus, sobre el pedido de desafuero de los señores diputados Escobar, Santamarina, Sánchez Sorondo y Moreno (R.).

—A la orden del día.

Peticiónes particulares

El comité metropolitano de la juventud pro autonomía de La Pampa, adhiere al proyecto del poder ejecutivo, declarando provincia el territorio federal de La Pampa y solicita su sanción. (*A sus antecedentes*).

—La sociedad taller de señoritas aspirantes de la conferencia de San Vicente de Paul (San Juan), solicita un subsidio. (*A la comisión de presupuesto*).

—Centros socialistas de las secciones 9.ª y 10.ª de la capital, solicitan la desaprobación del proyecto de la mayoría de la comisión especial de legislación del trabajo. (*A sus antecedentes*).

—Vecinos de Juárez (Buenos Aires), solicitan la aprobación del despacho de la minoría de la comisión especial de legislación del trabajo. (*A sus antecedentes*).

SOLICITUDES DE PENSIÓN:

Rita V. de Vallejos y Ana Salguero de Pérez. (*A la comisión de peticiones*).

allanamiento de los fueros del señor diputado doctor Rodolfo Moreno (hijo).

Sala de la comisión, agosto 28 de 1919.

Valentín Vergara. — Mario Bravo. — Evaristo Pérez Virasoro. — Delfor del Valle. — M. Laurencena.

Sr. Moreno (R.). — Pido la palabra.

Por razones fáciles de comprender yo no deseo influir con mi voto en la decisión que ha de tomar la cámara con relación a este despacho.

En la votación anterior permanecí sentado mientras los señores diputados votaban, y seguramente mi voto fué computado en contra de la moción del doctor Padilla porque era lo que correspondía. No deseo que ahora eso se repita. De manera que pido permiso a la presidencia para retirarme del recinto mientras se considera este despacho.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Habiendo asentimiento de la cámara puede retirarse el señor diputado.

Estando informado por escrito, se va a votar el despacho de la comisión.

— Sin observación, se vota y aprueba en general y en particular.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Queda sancionado el despacho de la comisión.

11

PROTECCION DE LOS MENORES ABANDONADOS Y DELINCUENTES

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se pasará a la orden del día.

Corresponde continuar con la discusión en particular del despacho de la comisión de legislación sobre protección a la infancia.

— En consideración el artículo 1.º

Sr. Avellaneda (N. A.) — Pido la palabra.

No voy, señor presidente, a dar motivos para que se reanude el debate sobre la indiscutible conveniencia de procurar solucionar el grave problema de la niñez desvalida y aban-

donada. Me propongo únicamente dejar constancia de mi voto favorable a este proyecto de ley, que persigue altos fines, que viene a subsanar serias deficiencias del código civil y que está llamado a llenar sensibles omisiones de nuestra legislación social.

Creo, señor presidente, que los diez mil niños que vagan por las calles de esta capital, sin hogar y sin pan, constituyen un hecho doloroso, si se quiere, pero elocuente, que prueba de una manera acabada la necesidad urgente que existe de sancionar sin demora la plausible iniciativa del señor diputado Agote, de entregar a la tutela del estado los niños abandonados y a los hijos de los incapaces.

Además, esta reforma, tan simpática, tan justa, tan esperada, pues se inspira en hermosos sentimientos humanitarios, y que responde a intereses generales de la sociedad, está pendiente de la consideración de la cámara desde hace varios años. La comisión de legislación que desde el momento en que le fué sometido a su estudio le prestó preferente atención, se ha visto en el caso de reiterar tres veces su despacho favorable.

Nadie puede ignorar, señor presidente, que las nuevas orientaciones del derecho civil, las necesidades actuales de la sociedad y el loable anhelo aceptado hoy por las naciones libres y cultas, de que el estado ejerza cada día más su alta tutela para proteger y mejorar el desenvolvimiento y las condiciones de vida de los seres humanos, han cambiado la naturaleza jurídica, la índole, y el objetivo de la patria potestad romana, que acordaba a los padres, sin distinción alguna, un poder despótico sobre sus hijos. Hoy, señor presidente, ese poder absoluto, se ha convertido en un conjunto de derechos y deberes, y se ha hecho de la patria potestad una institución de orden privada en interés de los padres y una institución de orden público en bien de los hijos y de los intereses colectivos.

Es decir, como lo ha observado un distinguido sociólogo, la obligación de

los padres para con sus hijos asume el carácter de delegación del poder social, para garantizar la protección jurídica de los menores. De modo que cuando la familia no llena el sagrado deber que le incumbe, el estado tiene el ineludible derecho de ejercer su intervención para arrancar a ese padre indigno el hijo que corrompe y pervierte. Estos sanos principios informan ya la legislación alemana, la australiana, la de varios estados de Norte América y la de otros países, y su justicia es tan elemental que me parece que con enunciarlos es suficiente. No he de insistir sobre ellos, y sólo he de agregar que la República Argentina tarda ya en incorporarlos a su legislación progresista y liberal, porque estos principios se proponen proteger y defender la infancia, es decir, la reserva, el futuro y la grandeza de nuestra nación, a fin de que ella sea lo más honesta y fuerte posible.

El viejo y tiránico concepto del derecho romano del tiempo de Justiniano, sobre la patria potestad, adoptado por el código civil argentino, debe desaparecer de nuestra legislación y ser reemplazado por el principio moderno a que acabo de referirme.

Señores diputados: apresurémonos a votar tan rápido como sea posible esta ley que va a salvar del abandono y de la corrupción a centenares de niños; no olvidemos que ellos serán los hombres de mañana y que si hoy su suerte está en nuestras manos, más tarde ellos han de poder pedirnos cuenta de lo que hicimos o dejamos de hacer. (*Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Melo. — Pido la palabra.

En este artículo 1.º, segundo párrafo, hay que salvar una omisión que deriva de un error de imprenta, y que consiste en las palabras "a la madre" después de donde dice: "El ejercicio de la patria potestad del hijo natural corresponde", y después seguiría el artículo tal como está.

Solicito se salve la omisión, reintegrando así el despacho de la comisión.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se va a votar el artículo 1.º del despacho

de la comisión, en la forma que se acaba de expresar.

—Se vota y es aprobado.

—Sin observación se vota y aprueba el artículo 2.º

—En consideración el artículo 3.º

Sr. Bravo. — Pido la palabra.

Voy a proponer a la comisión una cláusula aclaratoria y otra complementaria del artículo 308, que figura en el 3.º de su despacho.

Dice el artículo propuesto por la comisión: "El padre o la madre que haya sido objeto de varias condenas que demuestren que se trata de un delincuente profesional o peligroso, pierde el ejercicio de la patria potestad". Y en seguida: "La madre que contrajere nuevas nupcias pierde el ejercicio de la patria potestad de los hijos de los matrimonios anteriores, pero enviudando lo recupera". Deseo proponer a la comisión la siguiente cláusula en sustitución de esta segunda parte del artículo: "La madre que contrajere nuevas nupcias pierde el ejercicio de la patria potestad de los hijos de los matrimonios anteriores, a menos que los jueces reconozcan la conveniencia de mantenerla en su ejercicio". Y además este agregado: "En caso de enviudar, la madre ejerce de pleno derecho la patria potestad sobre sus hijos".

Creo que si la comisión acepta la modificación en los términos que propongo habrá introducido una modificación importante de principios en el régimen de la familia y habrá creado para los hijos una tutela en mejores condiciones que lo establecido hasta ahora.

La comisión ha mantenido la disposición vigente en el código, disposición que, como los señores miembros de la comisión saben, crea una serie de dificultades respecto del manejo y la administración de los intereses de los menores y de la persona de éstos.

Si la comisión acepta la proposición que formulo habremos dado un gran paso, sin ninguna violencia, desde que serán los padres los que solicitarán de

los jueces el ejercicio de la patria potestad.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

La comisión acepta, señor presidente. Había tenido en cuenta, respecto de la pérdida para la madre que contrae nuevas nupcias del ejercicio de la patria potestad de los hijos de los matrimonios anteriores, los sentimientos nuevos que se crean en un matrimonio subsiguiente: la afección para el marido y la influencia de éste y el cariño de la madre a los hijos del nuevo matrimonio en perjuicio de los del anterior; pero puede suceder y sucede que madres que contraen nuevas nupcias continúan teniendo cariño por los hijos, habidos en matrimonios anteriores y que se sustraen a toda influencia que pueda ejercerse en perjuicio de éstos, y sería una injusticia entregar el gobierno de la persona y de los bienes de los hijos a extraños, existiendo una madre capaz de sustraerse a todo influjo perturbador de otros afectos. Por eso la comisión acepta como una excepción a la regla general que el artículo formula, el agregado propuesto por el señor diputado Bravo.

En cuanto a la nueva forma que este da a la parte final del artículo actual de la comisión que dice "pero enviudando lo recupera", y que expresa lo mismo que lo propuesto por la comisión, no hay inconveniente. El pensamiento es este: nuestro código civil ha olvidado que la viuda que contrae segundas nupcias y pierde según él la patria potestad puede enviudar no teniendo hijos, o aun cuando los tenga del segundo matrimonio, y cuando enviuda le quedan los hijos de los dos matrimonios, y no hay razón para que los hijos de los primeros matrimonios continúen en manos de extraños, salvo los casos de abandono material o moral. La comisión no hace perder a la madre que contrae nuevas nupcias el derecho a la patria potestad sino a su ejercicio, y es justo que conservando el derecho recupere el ejercicio enviudando. Esta modificación última ha sido adoptada por la comisión teniendo presente lo prescripto en el nuevo

código civil del Brasil, que concuerda en esto con el espíritu de nuestra jurisprudencia.

La comisión acepta, pues, la modificación de fondo propuesta por el señor diputado Bravo para casos de excepción, así como también la de forma.

Sr. Gibert. — Desearía conocer en qué consiste la modificación.

Sr. Bravo. — Si me permite el señor presidente, lo explicaré al señor diputado.

La disposición actual del código civil, que la comisión mantiene en su despacho, establece que la madre que contrajera nuevas nupcias pierde el ejercicio de la patria potestad de los hijos de los matrimonios anteriores. Por el agregado que la comisión ha aceptado esa disposición quedaría así: "la madre que contrajere nuevas nupcias pierde el ejercicio de la patria potestad de los hijos de los matrimonios anteriores a menos que los jueces reconozcan la conveniencia de mantenerla en su ejercicio". Para que los jueces reconozcan la conveniencia de mantener ese ejercicio de la patria potestad es necesario que la madre y el nuevo marido concurren ante los jueces y de común acuerdo soliciten el mantenimiento. Quiere decir que la madre y el padre estarían de acuerdo en continuar en la dirección educativa y la administración de los intereses de los menores y no se produciría con ello ningún inconveniente en el orden interno de la familia.

Sr. Gibert. — Pido la palabra.

La reforma propuesta, al parecer tan sencilla, creo que tiene una importancia fundamental, y que destruye precisamente el concepto a base del cual se mantiene en el mismo despacho el principio de que la viuda que contrae segundas nupcias pierde la patria potestad.

¿Por qué razón la viuda que contrae segundas nupcias pierde la patria potestad?

Sencillamente porque se encontrarían en un hogar dos cabezas, dos jefes; el padre respecto de los hijos del nuevo matrimonio y la viuda respecto de los hijos del matrimonio anterior. Y preci-

samente lo que ha hecho que la viuda pierda la patria potestad cuando contrae segundas nupcias, es el propósito de evitar esta doble autoridad

Ahora se propone que el juez pueda autorizar que se conserve esta dualidad dentro de un mismo hogar. Esto importaría quebrantar el concepto general y reaparecería el inconveniente de la doble autoridad. Aceptada la modificación, no tendría la viuda por qué perder la patria potestad cuando contrae segundo matrimonio. La reforma, aparentemente sencilla, es en realidad fundamental.

Sr. Bravo. — Pido la palabra.

Quiero decirle al señor diputado por la provincia de Buenos Aires que el principio de derecho civil que él defiende se mantiene en el despacho. La regla general es que la madre al contraer nuevas nupcias pierde la patria potestad y la excepción es que puede conservarla cuando los jueces lo consideran conveniente.

Sr. Gibert. — No me convence lo que dice el señor diputado. Le haré presente que si se mantiene como él dice el principio del código civil, según el cual la madre viuda que contrae nuevas nupcias pierde la patria potestad, no se explica que la conserve cuando los jueces así lo dispongan. No es posible que conservemos ese principio de legislación y al mismo tiempo votemos una cláusula que lo destruye.

Sr. Bravo. — La regla y la excepción.

El señor diputado debe saber cuál es la situación creada a los hijos cuando la madre pierde la patria potestad; es una situación social peligrosa y la cámara no tiene por qué mantenerla cuando hay recursos legales aceptables, recursos que se establecen, desde luego, en beneficio de los hijos.

Sr. Gibert. — En mi concepto, el privar de la patria potestad a la madre no obedece más que a este sentido general, según el cual no pueden existir en un mismo hogar dos jefes.

Sr. Bravo. — No, señor diputado, el concepto es otro. El concepto de la ley civil es un concepto que no tiene en cuenta sino los intereses de los menores; ella ha tenido por mira principal substraer a la administración que ejer-

ce el marido sobre los bienes de la sociedad conyugal, los bienes que podrían pertenecer a los menores es decir, evitar que el marido en segundas nupcias pueda despojar a los hijos del primer matrimonio. En esta ley no tratamos de considerar una situación semejante, sino de contemplar los intereses permanentes de su crianza, de su educación, etcétera.

Sr. Gibert. — Es errónea la apreciación que hace el señor diputado, puesto que no es para cuidar el patrimonio del hijo, que ningún peligro tendría si la madre fuera la que conservara la patria potestad, puesto que entonces el marido no podría privar a los hijos de sus bienes. El objeto es impedir esta dualidad de autoridad dentro de un mismo hogar. Por esa razón es que al viudo que contrae segundas nupcias no se le priva de la patria potestad, mientras que a la viuda sí.

Ese concepto lo acepta la comisión y lo aceptamos muchos diputados, porque observamos que no hay motivos fundamentales, hasta ahora, para que no se mantenga el principio y no podemos admitir esa disposición que autoriza al juez a destruir los fundamentos en los cuales la ley nueva organizó la familia, por los principios de la antigua ley.

Yo creo que el principio debe mantenerse tal cual existe, o suprimirlo totalmente, es decir, que la viuda que contrae segundo matrimonio, conserva la patria potestad de los hijos, como el esposo, lo que considero que trae graves inconvenientes, porque existiendo hijos de dos matrimonios, siempre se producen preferencias que dan lugar a dificultades en lo que respecta al matrimonio, y es fuente de divorcios. Por consiguiente, creo que la ley debe mantener la separación. Estoy muy de acuerdo en que la madre, una vez que enviué, recupere nuevamente la patria potestad; aunque esto no lo autoriza la ley actual.

Por estas razones apoyo el despacho de la comisión, no satisfaciéndome en ninguna forma la enmienda pro-

puesta por el señor diputado por la capital.

Sr. Moreno. (R.) — Pido la palabra.

Acepto, señor presidente, el despacho de la comisión tal como ha sido formulado, no obstante las inteligentes observaciones hechas por el señor diputado por la capital, doctor Bravo.

En el régimen del código civil se encuentra establecido el principio de que la madre que se casa en segundas nupcias pierde el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos del primer matrimonio, pero no se contiene el precepto, que es el único en que se modifica el régimen del código civil por el despacho de la comisión, en esta parte, de que la madre que enviudara después de haber perdido la patria potestad, por el hecho de haber pasado a segundas nupcias, la recupera, principio que ha sido muy discutido y que ha dado lugar a casos de jurisprudencia, en los cuales se ha establecido que se recupera esa patria potestad. De manera, entonces, que el despacho de la comisión lo que hace es crear una situación definitiva y evitar las discusiones que se producen en los tribunales y que han dado lugar a diversos fallos.

Lo que propone el señor diputado, doctor Bravo, no es, a mi juicio, posible, pero por razones diferentes de las que él ha dado y de las que ha suministrado el señor diputado por Buenos Aires, doctor Gibert.

El objeto que ha tenido el código civil para establecer que la madre que pasa a segundas nupcias pierde la patria potestad, deriva de que no es posible que un incapaz de derecho tenga potestad sobre otras personas, esto es, que una persona que no tiene la capacidad plena, y la administración de sus propios bienes, como ocurre con la mujer casada, pueda tener sometidas a su patria potestad a otras personas. En el régimen de nuestro código civil, la mujer es un incapaz con incapacidad relativa desde el momento que no tiene el pleno dominio de su persona y que no tiene tampoco la administración completa de sus bienes, sino que está sometida, en cierto mo-

do, a la potestad marital. Una persona en estas condiciones, esto es, careciendo de la plena capacidad civil para gobernarse a sí misma, no puede tener autoridad sobre otras personas para representarlas en el pleno manejo de sus bienes y de su persona. Este es el fundamento del código civil. De manera, señor presidente, que si no se altera de modo fundamental el régimen del matrimonio consagrado en la ley argentina y que es análogo al régimen matrimonial de todas las leyes del mundo, no va a ser posible aceptar una modificación como la que propone el señor diputado Bravo, que en realidad destruye por completo este sistema.

Por eso considero, señor presidente, dentro, naturalmente, de las disposiciones actuales del código civil, que no se trata de modificar en absoluto, que la proposición que hace la comisión modificando el régimen actual, sólo en el sentido de que se recupere la patria potestad, es aceptable, pero que no lo es la nueva propuesta, que importa una alteración fundamental y que debe ser objeto oportunamente de un especial estudio.

Sr. Aráoz. — Pido la palabra.

En la consideración de este artículo, las observaciones que se han hecho respecto del régimen de los bienes que debe manejar la viuda que se casara en segundas nupcias, respecto de los hijos, me inducen a sostener que es inconveniente también el agregado aceptado por la comisión, según el cual la viuda que contrayendo segundas nupcias enviudara, perdería la patria potestad. Y encuentro precisamente el mismo inconveniente en el régimen de los bienes que pudieran tener los menores del primer matrimonio. Así por ejemplo, si consideramos la situación de la viuda casada en segundas nupcias, que como lo ha hecho notar muy bien el señor diputado Moreno, no tiene el manejo de sus bienes propios, sería el esposo del segundo matrimonio quien entraría a realizar y administrar los bienes de los hijos del matrimonio y del cónyuge extinto.

Ahora bien, ocurre generalmente esta situación. Supongamos que hay un viudo del segundo matrimonio. Según la legislación civil, la patria potestad involucra la percepción de los frutos. El viudo, al ejercer esa patria potestad respecto de los bienes, da lugar a la confusión de los patrimonios; pero si omitiéramos completamente este régimen de la patria potestad, para hacer que ejerciten el régimen de la tutela, obligaríamos a que presentaran cuentas de administración, y entonces, tendríamos completamente defendidos los patrimonios de los menores del primero y del segundo matrimonio. Ocurre frecuentemente que los bienes de los menores se encuentran perjudicados por esta mezcla de los frutos, que percibe la viuda del primer matrimonio, pertenecientes a los hijos sobre quienes ejercita la patria potestad, con bienes de los hijos del segundo.

Por estas razones, yo creo que, considerando faz tan importante del problema como es el régimen económico de los bienes que tengan los hijos del primero o segundo matrimonio, no podemos aceptar la segunda modificación sino dar simplemente al viudo que contrajera segundas nupcias el derecho primario y especial de la prelación para conseguir la tutela y para obtenerla también, en caso de que fuese viuda de segundas nupcias.

Por estas razones, voy a votar en contra de las modificaciones propuestas en el último párrafo del artículo 308 del código civil.

—Los señores diputados Agote y Melo solicitan simultáneamente la palabra.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Agote. — No es para referirme a lo que está en discusión, sino para decir que cuando se vote este artículo, antes de entrar al 2.º, deseo hacer algunas consideraciones, para las cuales solicitaré el apoyo de la cámara.

Sr. Gibert. — Pido la palabra.

Sencillamente para decir que no encuentro los inconvenientes que ha hecho notar el señor diputado por Tucumán, porque no se trata de capaci-

dad desde que si la ley establece que la patria potestad corresponde a la madre, la ley civil establece lo que es patria potestad, e implícitamente va comprendido que quién tiene la patria potestad tiene la facultad y capacidad para ejercer todos los actos relativos a ella.

Nada más.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Tiene la palabra el señor diputado por la capital.

Sr. Melo. — Señor presidente: la patria potestad significa dos cosas diferentes: poder sobre las personas y poder sobre los bienes. No quiero molestar a la honorable cámara con una exposición sobre la evolución de la patria potestad, en el sentido de la jurisdicción respecto de las personas y en el sentido del poder de disposición de los bienes. Los señores diputados saben cómo el derecho de vida y muerte, de vender y de dar es prenda de admonición y corrección sobre las personas y de disposición de los bienes que caracterizaban al padre de familia bajo el régimen de derecho paterno se ha transformado, llegando a ser lo que es bajo nuestros ojos. El primitivo derecho de la madre anterior al del padre, resurge y se afirma en el régimen actual de las sociedades civilizadas y la familia bilateral completa llegará a formarse como resultado de la evolución psíquica humana. La familia tendrá dos centros de atracción y de dirección, equilibrándose y sosteniéndose el uno al otro, como en esos sistemas de mundos que tienen soles dobles como centro. Y el derecho paterno y el materno habrán por fin alcanzado su integración. Pero la familia argentina, la del código civil y de la ley de matrimonio, tiene una organización arcaica, porque la unidad de ella se hace por la ley en beneficio del hombre y en perjuicio de la mujer. Las disposiciones relativas a los bienes, del título de la sociedad conyugal, muestran que el codificador quiso apartarse de reglas que creía malas, pero por un error de visión formuló otras que eran peores.

La mujer casada no tiene protección en el derecho civil argentino. Se ha restringido su capacidad arbitraria-

mente en materia de administración de sus bienes, prohibiéndole reservarse la de más de un inmueble en el contrato de matrimonio. Se la deja todavía incapacitada para enajenar sus inmuebles o constituir sobre ellos derechos reales, sin autorización judicial en los casos en que ha obtenido la devolución de la sociedad conyugal por separación de bienes, etcétera. Yo no quiero comparar dos cosas que son incomparables, pero sí afirmo que la mujer argentina, del punto de vista de su vida espiritual, es por lo menos, igual al hombre, porque el hombre se ocupa de las cosas materiales y la mujer hace una vida moral mucho más intensa, vida de sentimientos y de dirección del hogar.

El congreso argentino no puede dejar de comprender que lo que hay de uno y de esencial en una familia formada por sucesivos matrimonios de la mujer es la mujer misma. Y cuando esta mujer, según la apreciación de los jueces, es capaz de mantener unidos a todos sus hijos, de administrar sus bienes, de educarlos, de darles el cariño insustituible que suaviza y hace accesibles a los niños y a los adultos a todos los nobles sentimientos, no podemos negarle el derecho de ser cabeza de familia para sus hijos que no tienen padre.

Por otra parte, la cabeza moral de una familia es casi siempre la madre. El sentimiento primitivo y fundamental que existe en una familia es el sentimiento que liga la madre a los hijos. El sentimiento paterno es posterior, y quizá de otra naturaleza nos aparece en lo antiguo confundido con la propiedad y con un poco de autoritarismo y de violencia.

Por eso es que la comisión ha aceptado el pensamiento del señor diputado Bravo, que significa esto: que la familia sobre la base de la madre continuará, siempre que el juez considere que esta tiene las aptitudes mentales y morales para continuar como cabeza como centro de una familia que proceda de los matrimonios sucesivos contraídos por la mujer, cuando el padre ha perdido o ha sido privado del derecho de la patria potestad o de su ejercicio.

Sr. Aráoz. — Pero la comisión se plantea el caso de que el cónyuge superstite sea siempre la mujer.

Sr. Melo. — Ese es el caso del artículo de que estamos hablando. La comisión no está tratando el caso en que sea el padre el que sobreviva porque el código civil no ha privado al padre que contrae segundas nupcias de la patria potestad sobre sus hijos de matrimonios anteriores, y sí a la madre.

Sr. Aráoz. — El código civil no distingue...

Sr. Melo. — ¿Cómo no va a distinguir el código civil entre la mujer y el hombre, señor diputado? El hombre conserva la patria potestad y la mujer no, cuando contraen nuevas nupcias según el código civil.

Sr. Aráoz. — Yo le rogaría al señor miembro informante de la comisión que me aclarara cuál es el resorte que ha previsto la comisión para amparar los bienes de los menores del primero y segundo matrimonio a fin de evitar la confusión de patrimonios por la percepción de los frutos.

Sr. Melo. — Se aplicarán las disposiciones existentes en las leyes que se aplican hoy a los padres que contraen nuevas nupcias y que conservan la patria potestad de sus hijos de anteriores matrimonios.

Sr. Aráoz. — En los hechos no ocurre así.

Sr. Melo. — Pero si sólo extendemos a la madre las reglas del código civil que disponen que el padre que contrae nuevas nupcias conserva la patria potestad; ¿por qué ha de privar el señor diputado a la madre idónea de lo que da al hombre, aun al no idóneo?

Sr. Aráoz. — Es precisamente lo que deseo: una igualdad de situación para ambos casos. Y es justamente lo que la comisión no ha establecido.

Sr. Melo. — Pero se ha aproximado a ello. No se va a producir confusión de bienes. Si no se produce respecto del padre cuando éste conserva la patria potestad ¿por qué se ha de producir respecto a la mujer?

Sr. Aráoz. — Pero me parece que la comisión ha debido contemplar la situación del padre que enviudare respecto de los bienes de los hijos que

él queda administrando, porque puede tratarse de bienes de la esposa muerta.

Sr. Melo. — Ya lo dice el código civil.

Sr. Aráoz. — Esta es una reforma del código civil.

Sr. Agote. — En los artículos pertinentes nada más; no en el régimen económico.

Sr. Melo. — Ahora, en cuanto a la jurisdicción doméstica me parece que el señor diputado Gibert ha planteado, con mucha claridad, su punto de vista y me place que lo haya hecho así porque es un argumento de importancia.

Sr. Gibert. — Le prevengo que a mi juicio es el único fundamento capital porque tengo por la madre tanto respeto como el señor diputado. Creo que el hogar se debe precisamente a la madre.

Sr. Melo. — Todos lo creemos así.

En cuanto a la situación de la mujer que contrae nuevas nupcias, dentro de su nuevo hogar con su incapacidad relativa a ciertos actos o al modo de ejercerlos, como dice el código civil — y es también el argumento formulado por el señor diputado Moreno — es menester tener presente que la comisión no va a limitarse a la reforma presente; va a ampliarla con reformas que se refieren a la condición de la mujer. Se dice: si la mujer es incapaz respecto de ciertos actos o del modo de ejercerlos en cuanto a la familia nueva, ¿puede tener capacidad respecto de la antigua familia?

Yo no veo inconveniente, y además sería provisional, porque estudiando seria y hondamente esta cuestión, vemos que no hay razón alguna para que la mujer esté en las condiciones de inferioridad que le ha creado el codificador. No sé qué experiencia amarga o vulgar de la vida tendría el doctor Vélez Sarsfield, que era un hombre sagaz y sabio, para subordinar la mujer al marido, en la familia, como lo hizo para dejarla con el sello de la incapacidad aún después de disuelta la sociedad conyugal por separación de bienes.

Pero nuestra experiencia es otra y

otro nuestro juicio, y hemos de tratar, — en cuanto de nuestras fuerzas dependa, — que la mujer argentina recupere en la ley la capacidad que tiene en la vida, porque la ley no es otra cosa que la expresión de las relaciones de la vida; porque no hay regla de derecho, que sea tal, que pueda subsistir si no se desentraña de la realidad viviente.

Las leyes que no expresan lo que es la realidad son formas vacías destinadas a morir. Por eso la comisión acepta la proposición del señor diputado Bravo y pide a la honorable cámara que completando su pensamiento la vote. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

Sr. Arancibia Rodríguez — Pido la palabra.

Yo voy a votar en contra del agregado propuesto por el señor diputado Bravo al despacho de la comisión.

No voy a repetir las razones de carácter jurídico que ha dado el señor diputado Moreno, que a mi juicio son concluyentes, el discurso del señor miembro informante probablemente me convencería si, en vez de sancionarse un simple proyecto de protección a la infancia, se tratara de reformar en el fondo la legislación civil vigente sobre la situación jurídica de la mujer. Pero no me convence cuando se trata simplemente de tocar esa legislación en detalle y en forma sintética y cuidadosa, como lo ha hecho la comisión, respetando en lo fundamental la legislación civil vigente por lo que se refiere al régimen de la sociedad conyugal y a la incapacidad relativa que produce el matrimonio.

Me propongo tan solo hacer presente la imposibilidad, casi diría de hecho, en que se encontrarían los jueces y la propia mujer en cada caso, para presentarse al día siguiente de contraer matrimonio a solicitar de las autoridades judiciales la autorización que por el proyecto del señor diputado Bravo se necesita para continuar gozando de la patria potestad que ella tenía sobre los hijos del primer matrimonio. Por el mecanismo de este artículo se produciría el caso de que al día siguiente del segundo matrimonio de la mujer, los hijos del primer ma-

rimonio quedarían sin estar sometidos a la patria potestad por imperio de la ley, porque para continuar en ella se requeriría que los jueces declararan que no hay inconveniente. ¿Con qué elementos de juicio se pronunciarían los jueces al día siguiente de ese segundo matrimonio? Con ninguno, porque los jueces no pueden descontar el porvenir, no pueden pronunciarse sobre la capacidad y las condiciones morales de esa mujer, ni sobre la conducta del marido, porque no han de saber si el segundo matrimonio va a tener hijos y si habrá las complicaciones que pueden producirse en la vida diaria, para formar el criterio judicial y decir en cada caso si la mujer debe o no continuar con el ejercicio de la patria potestad.

Es muy curiosa la situación en que se va a colocar a la mujer en ese caso y muy delicada la del juez que debe pronunciarse.

Por lo menos esta observación necesita una aclaración de parte del autor de la indicación a fin de que pueda saberse en qué forma va a producirse esta autorización legal en cada caso para que continúe en el ejercicio del derecho que por el hecho del matrimonio queda suspendido desde el día en que se realiza.

Sr. Sánchez Sorondo. — Pido la palabra.

Voy a pedir que el artículo observado por el señor diputado Bravo se vote por partes hasta las palabras "patria potestad".

Yo estoy en contra no solamente del agregado que ha propuesto el señor diputado por la capital, sino del despacho de la comisión. No soy partidario de modificar el régimen de nuestro código civil; entiendo que lo que él ha establecido debe regir en tanto no se lo modifique totalmente, de acuerdo con el pensamiento que ha informado el proyecto del señor diputado Araya. Mientras a la mujer casada no se le reconozca el derecho de administrar sus bienes, debe estar sujeta a la administración del marido.

En ese sentido yo propondría la votación hasta las palabras "patria potestad", votando en contra del último párrafo del despacho de la comisión.

Sr. Melo. — Del régimen de 1870.

Sr. Sánchez Sorondo. — De cualquier fecha, señor diputado. Es mucho mejor el régimen *experimentado* desde 1870 y no las teorías un tanto aventuradas que acaba de anunciar el señor diputado en 1919.

Sr. Melo. — Experimentadas. Precisamente la experimentación nos da la razón, señor diputado.

Sr. Sánchez Sorondo. — Esas son las opiniones del señor diputado.

Sr. Melo. — Ahí está la jurisprudencia de los tribunales, a que se ha referido el señor diputado Moreno, y la experiencia de otros pueblos de la América del Sud, como el Brasil. Si el señor diputado tiene en la memoria los antecedentes de la reforma civil del Brasil, como debe tenerlos seguramente, recordará que eso es así.

Sr. Araya. — Pido la palabra.

Deseo presentar a los señores diputados la situación en que se encontrarán los hijos por dejarse llevar el legislador por los prejuicios sobre la inferioridad de la mujer y los dogmas de incapacidad establecidos en nuestro código civil.

No se quiere dar a la mujer la potestad sobre los hijos de su primer matrimonio y se acepta una solución que es mucho más perjudicial, desde el momento que se entregarían el cuidado, educación y bienes de los hijos a manos de terceros, que no pueden tener por ellos las atenciones, cuidados y cariños de los padres.

No veo que inconveniente haya en acordar a la madre la patria potestad, dado que lo que debemos buscar, sobre todo en estas horas, es formar una juventud sana.

El señor diputado Melo hace unos instantes expresaba una gran verdad, y es que si observamos a los jóvenes de la época actual, notaremos que las mujeres son más fuertes, más desarrolladas, más sanas y más inteligentes que los hombres. Estos, todavía, casi en su niñez se entregan a los placeres, y cometen excesos que no conocen las mujeres, en perjuicio de su capacidad, inteligencia y moralidad, que por su parte conservan totalmente las mujeres. Y hay otra razón que es funda-

mental, que también ha dado el señor diputado Melo y que consiste en que no se puede negar que el eje de la familia es la mujer. No haremos nada completo en favor de las generaciones venideras al crear escuelas y universidades, porque eso no da sino instrucción: lo que necesitamos es hacer la educación de la juventud del mañana, lo cual no lo hacen las escuelas y universidades sino que es realizado en el hogar, por obra exclusiva de la mujer. Si cada uno de nosotros piensa honradamente sobre lo que damos en educación a nuestros hijos, notará que es muy poca cosa: es la mujer la que forma los hijos, la que los hace útiles, y cuando oía hablar en este recinto de que se necesitaba formar el carácter y la moralidad de la juventud, pensaba que lo íbamos a alcanzar no por la creación de colegios y universidades sino protegiendo a la mujer y dándole los mismos derechos que tiene el hombre, lo que es perfecta justicia.

No puede decirse que con ello habremos falseado las orientaciones de cada sexo en la vida. La verdad es que no hay otra incapacidad de la mujer que la establecida por el hombre para conservar su supremacía y poder sobre ella. Es cierto que falta a la mujer enseñanza y conocimientos prácticos para ganar dinero en la lucha diaria; pero en la vida espiritual la mujer no solo es igual sino que es superior al hombre, sobre todo en lo que se refiere a la familia, a la orientación de los sentimientos del corazón de la juventud, es decir, a la formación de su carácter.

Sr. Carrasco. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Araya. — Con mucho gusto.

Sr. Carrasco. — Me parece que el señor diputado se aparta del aspecto más serio de la cuestión, que no es, tal vez, el de la preeminencia de la mujer sobre el hombre en cuanto a inteligencia y capacidad, cosa perfectamente discutible y en la que puede o no estarse de acuerdo. Y creo que es más importante saber si en el segundo matrimonio la mujer va a ejercer personal y realmente la patria potestad que se le acuerde o pueda acordársele...

Sr. Gibert. — Indiscutiblemente.

Sr. Carrasco. — ...o si va a ser ejercitada, muy posiblemente, por el segundo marido. Entonces, debe contemplarse la situación grave que resultará del conflicto de intereses en cuanto a la administración de los bienes; y desde que estamos por hacer nosotros una defensa de los intereses de los menores, no vayamos, con la modificación propuesta por el señor diputado Bravo, a hacer una complicación en perjuicio de los menores, por querer favorecerlos.

Sr. Moreno (R.). — Esa es la verdadera cuestión.

Sr. Carrasco. — Esa es la situación real. No tratemos de embarcarnos en una legislación fundamental sobre la situación jurídica de la mujer, que será la hora de abordarla cuando discutamos el proyecto presentado por el señor diputado Araya.

Sr. Araya. — En un todo de acuerdo, señor diputado. Pero es que la solución que se encuentra es entregar a terceros lo que no se da a la madre. Los hijos del primer matrimonio de la mujer irían a poder de terceros...

Sr. Carrasco. — Que no tendrían hijos con intereses opuestos.

Sr. Araya. — ...de gente que no tienen ningún cariño por ellos.

Sr. Sánchez Sorondo. — No tendrían intereses contradictorios.

Sr. Carrasco. — Un tutor extraño tiene más autoridad y responsabilidad que el marido en segundas nupcias sobre los hijos del primer matrimonio de la mujer, pues éste puede tener hijos cuyos intereses estén en contradicción con los de los hijos anteriores de su mujer. Eso es evidente.

Sr. Gibert. — Después, está ese hogar que el señor diputado quería salvar.

Sr. Araya. — Lo que quería salvar es, entre las facultades que la patria potestad acuerda, el cuidado de los hijos, pues me parece que la elección no es dudosa entre atribuirlo a la madre sobre los hijos de su primer matrimonio o encomendarlos a un extraño. Los señores diputados conocen el mal concepto que se tiene en general de la tutela. Es creencia difundida que los

niños que caen en manos de tutores pierden su familia y son descuidados en su educación moral. Eso es lo interesante y lo que tratamos de salvar.

Sr. Arancibia Rodríguez. — El señor diputado no debe olvidar tampoco el concepto que se tiene de los padrastreros.

Sr. Araya. — Pero no nos estamos refiriendo a padrastreros ni madrastras, sino a la madre. Perdóneme el señor diputado, pero su observación no tiene razón de ser.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Es que la madre está supeditada a la acción legal y a la influencia moral del marido en el segundo matrimonio.

Sr. Araya. — Precisamente, no queremos padrastreros, que no pueden ser buenos padres para hijos ajenos.

Sr. Carrasco. — Cuando reformemos el régimen del matrimonio y demos a una y otra parte todos los derechos que le corresponden, será el caso de discutir eso. Mientras tanto, sabe el señor diputado muy bien que el régimen de nuestro matrimonio está asentado sobre el predominio del varón, y el régimen social extra-legal, está también basado sobre ese mismo predominio, pues en la vida real es indiscutible — y no digo con ello una novedad — que los hombres tenemos el predominio emergente, no de la ley, sino de la naturaleza misma, débil y afectiva, de la mujer.

Sr. Sánchez Sorondo. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado Araya?

Sr. Araya. — Tengo miedo — porque el señor diputado habla a veces con un lenguaje de la edad media, sumamente sutil — que me envuelva, y preferiría, entonces, que esperara para hacer su observación a que haya concluido.

Sr. Sánchez Sorondo. — Le voy a hablar con el lenguaje de la edad contemporánea. No tenga ese temor el señor diputado, aunque creo que el señor diputado no lo abriga.

Sr. Araya. — Si me promete que no va a hablar así, con mucho gusto.

Sr. Sánchez Sorondo. — Creo hablar con el lenguaje de la edad contemporánea, y con la gramática de la edad contemporánea, que acaso no es la ofi-

cial, de manera que el señor diputado me va a comprender perfectamente.

Le quería hacer presente la situación que podría resultar si se aprobara la modificación propuesta por el señor diputado Bravo, aceptada por la comisión. Así, en un segundo matrimonio, la mujer tendría la administración de los bienes de los hijos del primer matrimonio, y no tendría la de sus propios bienes, ni la de los bienes de la sociedad conyugal.

Sr. Moreno (R.). — Ese ha sido, precisamente, mi argumento.

Sr. Sánchez Sorondo. — Esa sería una situación absurda, jurídicamente hablando; y esa sola razón me bastaría, independientemente de las razones que, concordantes con esta tendencia, han aducido los señores diputados Moreno, Arancibia Rodríguez y Aráoz, para oponerme al agregado propuesto por el señor diputado Bravo.

Pero es que yo me opongo además a la modificación que ha propuesto la comisión es decir, a que la mujer que vuelva a enviudar retome la administración de los bienes y la patria potestad que ha perdido por el segundo matrimonio.

Yo espero que el señor diputado por la capital haya comprendido la razón de mis objeciones, que no han sido expuestas en un lenguaje de la edad media sino en un lenguaje completamente inteligible, cosa a que no estamos oficialmente acostumbrados. (*Risas*).

Sr. Melo. — Yo no me explico... es decir, respecto del señor diputado sí me lo explico...

Sr. Sánchez Sorondo. — Muchas gracias.

Sr. Melo. — Tiene tanto placer el señor diputado en hacer juegos de ingenio que tomo esto como uno de los tantos juegos de ingenio que hace con efecto en esta cámara, de modo que me permitirá que conteste al señor diputado Carrasco.

Sr. Carrasco. — Es un honor. (*Risas*).

Sr. Martínez Zuviría. — Esto es siglo XVIII pleno. (*Risas*).

Sr. Melo. — O XVII.

Los tribunales acuerdan general-

mente la tutela al marido del segundo matrimonio...

Sr. Sánchez Sorondo. — La acuerdan o no la acuerdan.

Sr. Melo. — Si la acuerdan o no la acuerdan, la pueden acordar. ¿Y no les parece a los señores diputados más justo que la madre que contrae nuevas nupcias tenga la dirección de los propios hijos de sus anteriores matrimonios en aquellos casos en que sea idónea y no el segundo o tercer marido al que al fin sólo se confiere la tutela de ellos por haberse casado con la madre?

Sr. Gibert. — ¿Y el hogar?

Sr. Melo. — Voy a ocuparme de eso; pero antes quiero terminar con este argumento.

Se dice ¿cómo es posible que la mujer que ha contraído segundas nupcias y que no tiene por consiguiente la administración de sus propios bienes tenga la de sus hijos?

Ahí está, precisamente, el error del código civil, cuando ha establecido que en los convenios matrimoniales la mujer no puede reservarse sino la administración de un solo bien inmueble. ¿No es esto una injusticia? Si puede administrar un bien inmueble que puede ser muy valioso ¿por qué no ha de poder administrarlos todos?

La mujer casada no está, pues, completamente incapacitada; dentro del régimen actual de nuestro código, sólo lo está relativamente, respecto de ciertos actos. Puede administrar un bien inmueble suyo; puede, por consiguiente, cuando es idónea, dársele la administración de los bienes de sus hijos de anteriores matrimonios. Ahora, esta dualidad que se encuentra en el matrimonio de una mujer, que está por una parte subordinada al marido, o sea representada por el marido del segundo matrimonio en sus actos más serios, por ejemplo en sus pleitos y que, por otra parte, representa a sus hijos, no me parece que sea una dualidad tan profunda, tan irreductible. Al contrario, la mujer que ha contraído un segundo matrimonio, voluntariamente, se ha sometido a esta situación de incapacidad relativa dentro de la ley civil, con lo que tampoco estoy confor-

me, pero si ella es la cabeza única sobreviviente del primer hogar, debe continuar siendo idónea como cabeza, con todos los derechos respecto de los hijos de su primer matrimonio. Esto será siempre más justo que entregar el ejercicio de esos derechos sobre los hijos, lo mismo que su representación y la administración de los bienes de éstos al segundo marido que no tiene ni afecto ni interés. Es la madre la que representa el afecto fundamental y la continuidad de la familia.

Creo que esto es suficientemente claro.

Sr. Sánchez Sorondo. — Hace mal el señor diputado en argumentar con el afecto de la madre que vuelve a casarse.

Sr. Arancibia Rodríguez. — ¿Y por qué la comisión aconseja que la madre pierda la patria potestad en ese caso, cuando el discurso del señor diputado tiende a demostrar que no conviene esa pérdida?

Sr. Melo. — No, señor diputado...

Sr. Arancibia Rodríguez. — La comisión aconseja que se pierda la patria potestad y el señor diputado demuestra que eso es un gravísimo error.

Sr. Melo. — Pero, señor diputado, no he dicho eso. El señor diputado todo lo toma con una gran pasión, desde las minas hasta el segundo matrimonio. *(Risas).*

Sr. Arancibia Rodríguez. — Ese es el inconveniente de aceptar agregados que destruyen el principio que se trata de aplicar.

Sr. Melo. — No, señor diputado.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Eso le ha ocurrido a la comisión de legislación en este asunto.

Sr. Melo. — No, señor diputado, la comisión de legislación lo ha pensado muy bien.

Sr. Arancibia Rodríguez. — El agregado del señor diputado Bravo destruye fundamentalmente el proyecto de la comisión.

Sr. Melo. — ¿Cómo lo va a destruir, señor diputado!

La comisión de legislación ha pensado que la mujer que contrae segundo matrimonio, con este nuevo vínculo puede colocar en condiciones perjudi-

ciales por su subordinación afectiva absoluta a su marido y a sus hijos del segundo matrimonio, a sus hijos de las anteriores nupcias, y entonces ha adoptado la regla general, que una experiencia humana antigua aconsejaba; pero también ha pensado que para los casos en que el juez vea que esa absoluta subordinación moral no se establece, podría aceptarse la proposición del señor diputado Bravo.

Esto es lo que la comisión ha aceptado, lo que no contraría, en ninguna forma, su despacho.

Nada más, y pido disculpas al señor diputado por la capital por haberlo interrumpido.

Sr. Araya. — Sería adelantarnos además, señores diputados, a una reforma que habrá de producirse en breve y que es indispensable. No sólo hay un proyecto presentado en esta cámara, que ha dado en llamarse de "emancipación civil de la mujer" y que en realidad no es más que de igualación de los derechos con el hombre, sino que también existe en el senado otro presentado por el señor senador del Valle Iberlucea, que tiene despacho favorable de la comisión del senado. La comisión de legislación de la cámara, debo añadir, tiene ya casi listo su despacho en sentido favorable.

Si vamos a establecer esa igualación de los derechos civiles entre la mujer y el hombre en el proyecto que haremos de tratar próximamente y que espero ha de ser sancionado en un sentido favorable ¿por qué no habremos de adelantarnos a establecer desde ya esta situación que significa un progreso en lo que se refiere al régimen del matrimonio?

En realidad no se trata de revolucionar el régimen matrimonial, sino de establecer una mayor protección respecto de los hijos, que no habrá de dársele jamás un tercero, ni el segundo esposo de la mujer, sino la misma madre.

Me asombra que los señores diputados hagan un argumento sobre el régimen establecido por nuestro codificador, que es un régimen atrasado y que experimentalmente se ha demostrado que es defectuoso.

Sr. Sánchez Sorondo. — No se ha demostrado tal cosa.

Sr. Araya. — Y tan se ha probado que es así que existe un anhelo general, no sólo entre las mujeres sino entre la parte más culta de los hombres, el de establecer un régimen de mayor justicia en el matrimonio, para darle a la mujer los derechos que por la naturaleza le corresponden. Si no se hubiese demostrado eso, no existiría este afán de la mujer en todos los países del mundo, por elevarse hasta igualarse al hombre.

Sr. Sánchez Sorondo. — Eso es un error femenino.

Sr. Araya. — Y no creo que puedan discutirse los derechos de la mujer, cuando en esta conflagración última acaba de desempeñar los mismos oficios que desempeñaban los hombres, hasta los más rudos, prestando a la patria servicios importantísimos, que no le podrán ser pagados suficientemente. De manera que hablar de la incapacidad de la mujer y de su inferioridad, es caer en un prejuicio legal, como se cae en un prejuicio religioso cualquiera.

No querría agregar nada más. Me parece que por encima de la lectura del código debemos colocar el espíritu de la época de libertad que estamos viviendo, y en este sentido hay que acordar a la mujer una situación que en justicia le corresponde, es decir, garantizarle los mismos derechos que tiene el hombre.

He dicho.

Sr. Bravo. — Pido la palabra.

Muy pocas voy a decir en apoyo de la proposición que he sometido a la consideración de la cámara y que la comisión ha aceptado.

Pienso que los diputados que se oponen al agregado propuesto, le dan a este una importancia de regla general que no tiene. Dije ya que el agregado no modifica el concepto fundamental del despacho, manteniendo el principio vigente en el código civil, pues el agregado tiende a contemplar una situación excepcional.

La patria potestad se ha de ejercer con relación a la persona de los hijos y con relación a sus bienes.

Por el régimen del código civil, en

caso de segundas nupcias, todos los derechos inherentes a la patria potestad pasan a un tercero que en la generalidad de los casos es el segundo esposo de la mujer; y los hijos, en cuanto a su persona y bienes, quedan sometidos a la autoridad de este tercero que puede ser un extraño al régimen de la familia y que en muchos casos es una sorpresa desagradable, cuando él es un mal administrador, por ejemplo, o cuando el segundo marido es hombre de malas condiciones personales.

Los jueces tendrán que acordar, cuando haya conveniencia, a la madre, el mantenimiento de sus derechos, deberán analizar las situaciones particulares que se le sometan y no existirá el caso que prevén algunos señores diputados de conflictos entre la incapacidad que la madre tiene en su condición de esposa y la condición o la capacidad que la madre viene a tener en virtud de su ejercicio de la patria potestad.

En cuanto al régimen de las personas de los hijos y de sus bienes, la esposa mantendrá todos sus derechos como si no estuviera casada y defenderá la educación de sus hijos con más interés y con más capacidad que lo que puede hacerlo un tutor extraño; y en cuanto a los bienes, la madre conservará toda la capacidad que el código da a las personas que ejercen la patria potestad para que pueda ejercerla con independencia de todo poder extraño. De manera que no se presentará el caso de un conflicto entre la madre en ejercicio de esa patria potestad y los bienes e hijos del segundo matrimonio o con el marido.

El señor diputado Melo, presidente de la comisión, ha dado razones de fondo para aceptar el agregado propuesto. Una de ellas es la referencia que hizo a las condiciones en que el código civil rige en nuestro país. No podemos aplicar a nuevas modalidades de la organización de la familia y a exigencias creadas por los tiempos presentes, un régimen de organización que ha sido confeccionado para sociedades de organización rudimentaria, en tiempos en que se consideraba a la mujer un accesorio en la vida del hombre.

Hoy, los conceptos han cambiado de una manera fundamental y toda la reforma que se hace en los criterios legislativos por obra de la jurisprudencia tiende a aumentar en cuanto es posible la capacidad de la mujer dentro de la interpretación de las leyes. El mismo señor diputado por Buenos Aires, doctor Moreno, señalaba el caso contemplado por la comisión en su despacho, de la madre que enviuda y se reintegra en el ejercicio de la patria potestad. Algunas jurisprudencias han entendido que la madre que pierde la patria potestad por segundo matrimonio, en caso de enviudar no se reintegra en el ejercicio de sus derechos; pero la nueva jurisprudencia, dada por jueces que contemplan las situaciones reales de la vida social argentina, por hombres que estudian la ley y que la aplican, no con el criterio inflexible de fórmulas que no dan lugar a discusión de ninguna clase, por hombres que han ensanchado el viejo concepto jurídico de la organización de la familia en esta parte, han resuelto que las leyes, al no prohibir que la madre se reintegrará en el ejercicio de la patria potestad para ejercerla en toda su amplitud, una vez que haya ocurrido el caso de la enmienda acuerdan dicho derecho.

La situación planteada por la comisión con la modificación que ella ha aceptado, no puede traer peligros de ninguna naturaleza para la organización de la familia, porque la base substancial establecida por el código civil para esa organización se mantiene, y en este sentido, pueden estar tranquilos los espíritus conservadores, que quisieran ver en la enmienda un principio de revolución en el régimen de las relaciones privadas. Es indudable que la reforma del régimen de la familia ha de venir, y creo que ya la comisión de legislación tiene muy avanzado el estudio de un proyecto que incorporará al régimen del matrimonio nuevas modalidades, exigidas por la situación de la organización social presente. Y cuando el despacho de la comisión de legislación sobre el divorcio llegue a la consideración de la cámara, es posible que los señores diputados

tengan oportunidad de completar la capacidad de la mujer, estableciendo un régimen nuevo para la sociedad conyugal.

Pero por hoy, señor presidente, se trata únicamente de contemplar situaciones excepcionales, con ánimo de favorecer los intereses de los hijos, en cuanto a sus personas y en cuanto a sus bienes, porque entendemos, los que sostenemos la enmienda, que nadie mejor que la madre podrá defender los bienes de los hijos y que nadie mejor que la madre podrá vigilar los intereses de los hijos, en cuanto a su crianza y en cuanto a su educación.

Si hoy la ley entrega sin control y sin piedad de ninguna naturaleza la persona y los bienes de los menores a la administración de un tercero, no puede haber ningún inconveniente para que los jueces entreguen la administración de la persona y de los bienes de esos menores, a la propia madre.

Por estas razones, creo que los señores diputados, dando a la enmienda el alcance de una disposición de excepción, deben aprobar el despacho de la comisión, que ha aceptado, desde luego, la proposición que me he permitido formularle.

Sr. Carrasco. — Pido la palabra.

Quiero referirme solamente a la situación que plantea el señor diputado Bravo, afirmando que se trata de una reforma de excepción.

Yo entiendo que no habrá excepción, sino que se producirá una situación general, porque no habrá madre que contraiga segundas nupcias que no se crea y no entienda que ella debe ejercer la patria potestad mejor que cualquier tercero, por cuya razón, será esta la situación común predominante: ella solicitará, de acuerdo con su segundo marido, la administración y el ejercicio de la patria potestad de sus hijos del primer matrimonio.

Sr. Bravo. — Le voy a explicar al señor diputado, y discúlpeme la interrupción.

La enmienda atribuye la facultad de conceder los derechos de la patria potestad a los jueces, de manera que serán los jueces los que ejercerán una

especie de gobierno sobre el régimen de la familia.

Sr. Carrasco. — Pero no de oficio, sino a petición de los interesados.

Sr. Bravo. — Es evidente.

Sr. Carrasco. — En la situación planteada, la única persona interesada es la madre, que contrae segundas nupcias ¿y cuándo dejará ella de solicitar el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos del primer matrimonio? La situación no será de excepción...

Sr. Bravo. — Pero el juez puede no concederla.

Sr. Carrasco. — Puede o no concederla, pero como no tiene elementos de juicio para negarla, porque no puede prejuzgar sobre la situación moral y las condiciones personales del nuevo marido ni sobre la situación futura del nuevo hogar, ni si habrá conflictos nuevos, porque todavía no existen hijos del segundo matrimonio, resultará que esa situación de excepción se convertirá en una situación normal, será la regla general. Todas las madres que contraigan segundo matrimonio se apresurarán repito, a solicitar de los jueces, y éstos no podrán negar nunca, el ejercicio de la patria potestad, y tendremos esta situación grave: ¿Cómo podrá salvarse el caso, muy posible, de diferencias entre el primer momento de la unión en segundas nupcias y el resto de la vida de ese nuevo hogar, en el cual los hijos que nazcan van a traer sus bienes a la administración del marido, que será sin distinción la administración única de todos los bienes, tanto de los propios de la mujer, como de los gananciales del segundo matrimonio y de los propios del marido, confundidos con los que puedan tener los hijos del primer matrimonio?

No es una situación de excepción; es una situación general que la ley va a crear con carácter normal, produciendo conflictos entre los intereses de los menores del primer matrimonio y los intereses de los menores del segundo matrimonio, conflictos que tendrán que solucionarse judicialmente, a petición de parte, cuando los perjuicios se hayan producido y sean posiblemente irreparables.

Sostener que la madre y el segundo

esposo han de administrar los bienes con independencia, ejerciendo separadamente sus respectivas funciones, la madre con respecto a los bienes de los hijos del primer matrimonio, y el marido con respecto a los de los hijos del segundo matrimonio, me parece que es sostener algo que está en contra de la realidad de los hechos. No es posible. Lo he sostenido antes y lo repito ahora; en el régimen legal de nuestro matrimonio el predominio es del hombre, el predominio es del administrador, y cuando no es del hombre, sino de la mujer, porque ésta demuestra tener mejores condiciones o más carácter, siempre es uno el que administra y manda.

No es por un espíritu conservador que formulo estas observaciones, sino con un espíritu previsor, lo que es muy distinto. Yo he de votar con mucho gusto todas las leyes de reformas sociales relativas al régimen del matrimonio y a la situación jurídica de la mujer, pero cuando se trate de reformar la institución en sus fundamentos; pero no he de votar, a título de pequeñas reformas, modificaciones a las leyes vigentes que puedan traer males más graves que los que se pretende remediar.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Los que no somos abogados creo que tenemos, señor presidente, al considerar asuntos de esta clase, una inmensa ventaja sobre los abogados, y es que los contemplamos exclusivamente desde el punto de vista humano, mucho más amplio y muy por arriba del punto de vista convencional, un tanto estrecho, en que su preparación profesional encierra a los abogados.

Ahora bien; desde el punto de vista humano, yo creo que sería mucho más sensato y más fundado, si se quiere ejercer tutela sobre la familia, privar de la patria potestad sobre los hijos del primer matrimonio a un padre que contrae segundas nupcias, que no privar de la patria potestad a la madre en el mismo caso. Porque el amor materno es mucho más fuerte, es un instinto mucho más radical y primario—es bien sabido—que el amor paterno, y es la madre la administradora del hogar

y la verdadera educadora de los hijos. Por lo tanto, es más probable que haya una influencia perjudicial de la madre sobre los hijos del primer matrimonio del padre, que no una influencia perjudicial del padrastro sobre los hijos del primer matrimonio de la madre, a quienes ella defenderá con santa energía.

Me parece que el detalle de la cuestión de la administración de los bienes de una que otra familia millonaria no debe impedir la sanción de una medida moralizadora que amplía los estrechos marcos dogmáticos y despóticos de nuestro código civil.

Creo, por tanto, que se debería aceptar esa modificación sin más discusiones.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

Voy a decir muy pocas esperando que el señor diputado por Santa Fe, doctor Carrasco, quedará satisfecho.

El señor diputado por Santa Fe presentaba los inconvenientes que podría traer la adopción de la modificación propuesta por el señor diputado Bravo en el sentido de que no habría remedio, una vez concedido el ejercicio de la patria potestad a la madre que contrae segundas nupcias. Pero es que el juez concede ese ejercicio y por artículos subsiguientes suspende o quita el ejercicio; de manera que si el juez —y aquí contesto también a la observación del señor diputado por San Luis—no tiene inmediatamente elementos de juicio suficientes, tiene en cambio la obligación de vigilar por esta misma ley, y la facultad de suspender o privar del ejercicio de la patria potestad.

Sr. Carrasco. — Sabemos lo que son esa clase de obligaciones. Si la tutela del estado sobre la familia es espontánea, iríamos a un desquicio.

Sr. Melo. — Pero note el señor diputado que es el orden social y la justicia humana lo que así se expresa.

Sr. Carrasco. — ¿Dónde vamos a ir a parar si el estado puede intervenir para decir que la patria potestad está hasta aquí bien ejercida por el marido y de aquí en adelante debe ser ejercida por la mujer?

Sr. Melo. — ¡Pero si a los jueces confiamos nuestra vida, nuestro honor, el

honor de nuestras familias que ellos tienen en sus manos cuando dictan las sentencias!...

Sr. Carrasco. — A requisitoria de parte.

Sr. Melo. — Sí, a requisitoria de parte.

Sr. Carrasco. — Entonces no sería espontánea. Tendría que modificarse la situación creada cuando una de las partes se presentara a decir que la patria potestad acordada a la mujer estaba mal acordada.

Sr. Melo. — No, señor; porque el juez habrá acordado el ejercicio de la patria potestad a la madre en virtud de la facultad que da la ley si la encuentra idónea; y de oficio o por denuncia podrá más tarde privarla o suspenderla en ella...

Sr. Carrasco. — ¿Cree el señor diputado sinceramente que los jueces ocuparán su tiempo en vigilar la manera cómo desempeñan la patria potestad las mujeres?

Sr. Melo. — Vea el señor diputado lo que dice el artículo 24 del despacho.

Sr. Carrasco. — No estoy de acuerdo.

Sr. Melo. — Nosotros hemos buscado un mecanismo que sea completo.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se va a leer el artículo 308.

Sr. Sánchez Sorondo. — Que se vote por partes; primero hasta las palabras "patria potestad".

Sr. Presidente (Goyeneche). — La secretaría va a leer el artículo 308 por partes y de acuerdo con las modificaciones aceptadas por la comisión y propuestas por el señor diputado por la capital.

Sr. Secretario (Zambrano). — "Artículo 308. El padre o la madre que haya sido condenado por delito grave o que haya sido objeto de varias condenas que demuestren que se trata de un delincuente profesional o peligroso pierde el ejercicio de la patria potestad". Esta es la primera parte. Y la segunda: "La madre que contrajere nuevas nupcias pierde el ejer-

cicio de la patria potestad de los hijos de los matrimonios anteriores, a menos que los jueces reconozcan la conveniencia de mantenerla en su ejercicio. En caso de viudedad la madre ejerce el pleno derecho de la patria potestad sobre sus hijos".

Sr. Melo. — Recupera el ejercicio.

Sr. Sánchez Sorondo. — La primera votación sería hasta las palabras "patria potestad" del segundo párrafo del artículo 308.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Hasta ahí se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se va a votar la segunda parte.

—Se lee:

"La madre que contrajera nuevas nupcias pierde el ejercicio de la patria potestad de los hijos de los matrimonios anteriores, a menos que los jueces reconozcan la conveniencia de mantenerla en su ejercicio. En caso de viudedad la madre ejerce de pleno derecho la patria potestad sobre sus hijos".

Sr. Gibert. — Que se vote por partes.

—Se vota: "La madre que contrajera nuevas nupcias pierde el ejercicio de la patria potestad de los hijos de los matrimonios anteriores", y resulta afirmativa.

—Se vota: "... a menos que los jueces reconozcan la conveniencia de mantenerla en su ejercicio", y resulta negativa de 27 votos sobre 65 señores diputados.

Sr. Bravo. — Pido que se rectifique.

—Rectificada la votación da el mismo resultado.

Sr. Melo. — Quedando el artículo así, pido que se vote tal como está la última cláusula del despacho de la comisión.

—Se vota: "...pero enviudando lo recupera", y resulta afirmativa.

Sr. Agote. — Pido la palabra.

Había anunciado, señor presidente, que antes de seguir adelante iba a hacer una observación para completar el artículo 307.

Por una circunstancia completamente accidental e involuntaria me fué imposible llegar a la cámara a la hora reglamentaria. Por eso me veo obligado a solicitar de la comisión en este momento que acepte un agregado al artículo 307 que en realidad no discrepa con las opiniones de la comisión y que se encuentra establecido en otro despacho de la misma.

Pido disculpas a la honorable cámara y trataré de ser lo más breve y concreto posible para expresar mi pensamiento deseando que la comisión acepte lo que voy a proponer, respetando mucho las razones que ella ha tenido para hacer de un asunto dos despachos, pero que en realidad pueden confundirse en uno solo.

El artículo 307 establece las condiciones que determinan la pérdida de la patria potestad. Son los tres incisos que todos los señores diputados tienen en la orden del día.

El artículo ocho de otro despacho de la comisión de legislación referente al trabajo de los niños que está en la orden del día 86, dice lo siguiente: "Los padres de los menores que trabajen sin la autorización exigida por la presente ley perderán la patria potestad de acuerdo con las disposiciones de la ley de patronato de menores".

En este artículo, como notan los señores diputados, se establece una nueva condición para perder la patria potestad; y en la segunda parte se establece que tal pérdida será de acuerdo con las disposiciones de la ley que estamos discutiendo.

En esta clase de asuntos en debates parlamentarios y en la función de la legislación caben todas las hipótesis racionales: de que el despacho pase, de que el despacho no pase, de que el despacho se modifique, de que se trate uno solo de los despachos de la comisión de legislación, de que no se traten los dos despachos. Y entonces entendía que podía ocurrir este hecho curioso señores diputados: que por un lado se dispone, en una ley que podría mos llamar ley de fondo, las condiciones en que se pierde la patria potestad, y en un segundo despacho comple-

mentario, se dispone también la pérdida de la patria potestad, no estando establecido en la ley de fondo, y sin embargo, la comisión dice: de acuerdo con las disposiciones de esa ley de fondo. Llamo ley de fondo a este despacho que estamos discutiendo ahora, que es el que reglamenta la pérdida de la patria potestad, modificando los artículos pertinentes al código civil.

Y bien, señor presidente: la causa de esta nueva pérdida, la causa de pérdida de la patria potestad, se refiere a los padres que violan las disposiciones de este proyecto de ley referente al trabajo de los menores y de los niños en distintos medios, uno de los cuales es la vía pública cuando la venta de artículos o su trabajo se efectúa en ella.

Yo, señor presidente, considero que todas las leyes de protección a los menores, el patronato de los mismos, van a fallar si no se establece de una manera perfectamente definida y terminante la prohibición absoluta, para los menores de cierta edad, de los trabajos en la vía pública. Y entonces yo decía esto: agregar, como un cuarto inciso del artículo 307, una disposición que diga que también perderá la patria potestad cuando los menores de 16, 17 o 18 años de edad — lo que se quiera aceptar — trabajen en la vía pública, incluyéndose a los vendedores de diarios y publicaciones, ilustrados y todos esos pequeños falsos oficios en que trabajan los niños y que no sirven sino para fomentar la vagancia primero y el crimen después, que se consideran, digo, casos de abandono material y moral, en cuyo caso el estado es el que se encarga del tutelaje de estos niños abandonados moral y materialmente.

Me parece que la comisión ha dividido estas dos cosas que deben estar en un solo artículo, porque mañana puede suceder, entre las contingencias de la tramitación de estos asuntos, que, al ir al senado estas dos leyes, sea despachada una y la otra no y entonces ocurra que nos hemos encargado de proteger a los menores de edad y los hemos dejado en el peor de los vicios.

en el centro más fecundo para crear criminales y perdularios y para fomentar el crimen en todas sus formas.

Yo no quiero cansar a la cámara, y antes de seguir adelante solicitaría de la comisión que accediera a este pedido, que no tiende más que a completar en forma positiva, factible y eficaz el pensamiento de proteger a los menores abandonados y delincuentes.

Me explico, señor presidente, que cuando se trata de una ley de reglamentación del trabajo de los niños se entre en todas las disposiciones a que ha entrado el proyecto de ley del señor diputado Repetto y el del señor diputado Araya; me lo explico perfectamente, pero creo que lo uno no contradice lo otro; en todo caso, serán dos leyes complementarias, y si por casualidad una no se despachara habríamos establecido en esta ley una disposición pertinente, que suprime de raíz una de las fuentes más fecundas del crimen; y es por eso que solicito de los señores diputados quieran aceptar el siguiente agregado al artículo 307.

El artículo 3.º es un agregado al artículo pertinente del código civil. Confieso que hablo con cierto temor y pido desde ya disculpas a los señores diputados si cometo quizás errores, diré, jurídicos, al tratar esta materia; pero lo único que deseo es que quieran tomar mi pensamiento para darle forma, siendo como son, preparados en esta materia jurídica.

El artículo 307 del código civil, que lo tengo a la mano y que los señores diputados lo conocen, se refiere a la pérdida de la patria potestad, respecto de lo cual yo pediría la agregación de lo siguiente: "Pierden asimismo la patria potestad cuando los abandonaren moral o materialmente. Se presume el abandono moral o material de los niños que no habiendo cumplido 17 años de edad vendan periódicos, publicaciones u objetos de cualquier naturaleza que fueren, en las calles y lugares públicos; cuando en estos sitios ejerzan oficios lejos de la vigilancia de sus padres o guardadores, y cuando sean ocupados en oficios o empleos perjudiciales a la moral y a la salud".

Este artículo ha sido redactado por el señor agente fiscal del crimen doctor Coll, uno de los miembros de la judicatura que más se han ocupado de esta materia, cuyas vistas son documentos escritos con dolor sobre la vida y la miseria de los desgraciados niños que moran en las cárceles o comisarías y que terminan definitivamente en el presidio. El doctor Coll los ha seguido paso a paso con el entusiasmo y el interés de corregir ese mal social y ha dado a la idea la forma del artículo que he leído porque entiende que sería la manera de responder a esa exigencia de profilaxis social que está reclamando del congreso desde hace muchos años y que por un motivo u otro no ha hallado la condigna solución que todos sin excepción deseamos debido a que, como sucede siempre en estas cosas, se dificulta en ponerse de acuerdo sobre la forma.

Antes de continuar considerando este punto, desearía oír la opinión de la comisión sobre este pedido, dejando constancia que al hacerlo no desconozco el valor que representa su inclusión en el segundo despacho.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

Contestaré al señor diputado.

El artículo 307 del código civil, reformado en el artículo 3.º del despacho, que define lo que se entiende por vo en el artículo 21 del mismo despacho, que define lo que entiende por abandono material y moral.

De manera que la proposición del señor diputado debe considerarse cuando se trata el artículo 21 del despacho.

Sr. de Tomaso. — Pido la palabra.

Como le voy a contestar al señor diputado por Buenos Aires en nombre de la comisión, empezaré por hacerle una observación fundamental, y es que el despacho que estamos discutiendo está hecho sobre la base del proyecto del señor diputado, en el cual no figura el artículo que ahora pretende que se incluya en el despacho definitivo.

Sr. Agote. — Cuando yo presenté el primer proyecto de ley incluí éste entre sus artículos.

Sr. de Tomaso. — Me refiero al proyecto que está en la orden del día.

Sr. Agote. — No hay, pues, contradicción.

Sr. de Tomaso. — Yo no he dicho señor diputado, que haya contradicción. He querido señalar el hecho, simplemente.

Sr. Melo. — ¿El señor diputado tiene inconveniente en que se trate este punto cuando se considere el artículo 21, que es donde corresponde?

Sr. Agote. — Acepto dejarlo para esa oportunidad. Lo único que quería explicar es la aparente contradicción que encuentra el señor diputado de Tomaso. Lo que sucede es que se han hecho seis o siete despachos sobre el proyecto primitivo, y cada vez he ido cediendo un poco para conseguir que llegara a considerarse alguna vez.

La primera vez que presenté el proyecto prohibiendo la venta de diarios en las calles, se produjo un movimiento tal, que un día iba por la calle Florida y con gran sorpresa oí voces que decían: "Muera el diputado Agote", "Abajo el diputado Agote". Yo, que estaba parado en una esquina, al oír esto me puse a contemplar este juicio político tan entusiasta que me hacía la multitud. Eran unos 700 u 800 harapientos que llevaban a la cabeza un gran estandarte en el que se leía: "Abajo el diputado Agote, porque prohíbe la venta de diarios". Todos los diarios, salvo honrosas excepciones, me dedicaron artículos terribles. La comisión me dijo que era más conveniente buscar una forma de salvar la situación, para que los diarios quedaran satisfechos y no le hicieran fuego. Acepté entonces ciertas modificaciones....

Sr. de Tomaso. — ¿La comisión de legislación ha hecho eso?

Sr. Melo. — ¿La actual comisión?

Sr. Agote. — Me refiero a la primera modificación; hablo de 1910.

Después he reproducido mi proyecto tantas veces como ha sido necesario, y cada vez los señores diputados abogados me indicaban la conveniencia de ir retocándolo un poco, hasta quedar en la forma actual.

Pero creo que para que la ley sea eficaz respecto de la venta de diarios y de la vida nómada de la calle, la pro-

hibición debe estar establecida expresamente en ella, dejando a la comisión, como he dicho bien claro, a su inteligencia, a su preparación, a su buen deseo, la forma de traducir este pensamiento de modo que responda al concepto fundamental.

Entretanto, acepto lo que me indica el señor diputado, y me reservo oportunamente discutir este punto.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Muy bien; quedará para considerarse cuando se trate el artículo 21.

—En consideración el artículo 4.º

Sr. Agote. — Hago indicación para que se den por aprobados los artículos que no se observen.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Si no se hace observación, así se hará.

—Asentimiento.

—Mientras se espera para formar quórum:

12

CARTA ORGANICA DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

Sr. Avellaneda (M. A.) — Pido la palabra.

Aprovechando este momento de espera para obtener quórum en el recinto, me permito indicar la conveniencia de que se invite al señor ministro de hacienda a concurrir a la cámara, a fin de que tome parte, si lo cree oportuno, en la discusión del despacho de la comisión de hacienda referente a las modificaciones a la ley orgánica del banco hipotecario nacional.

Se trata de un proyecto remitido por el poder ejecutivo, en el que se han introducido reformas de alguna importancia, y es de suponer que el señor ministro de hacienda tenga interés en tomar parte en su discusión.

Creo, pues, que la cámara debe hacer saber al señor ministro que en la sesión de hoy va a entrar la cámara a ocuparse de este asunto, para que si lo juzga conveniente concorra a ella.

15

**PROTECCION DE LOS MENORES
ABANDONADOS Y DELINCUENTES**

Sr. Presidente (Goyeneche). — Continúa la consideración de la orden del día.

Si no se hace uso de la palabra, se votará el artículo 4.º

—Es aprobado.

—En discusión el 5.º

Sr. Agote. — Yo había hecho indicación para que todo artículo o inciso que no fuera observado se diera por aprobado.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Es exacto, señor diputado; y así va a proceder la presidencia.

Sr. Melo. — El artículo 336 del código civil figura, por error, en el despacho; él se refería únicamente al artículo 330 de ese código. Se trata de un error de imprenta.

Sr. Molina. — ¿Me podría expresar el señor miembro informante si este artículo se refiere, como supongo a los hijos naturales, reconocidos o declarados tales por sentencia?

Sr. Melo. — Sí, señor diputado: se refiere a los hijos naturales; pero la comisión no ha querido referirse al artículo 336 porque él niega a los padres naturales la administración y el usufructo de los bienes de sus hijos; lo que la comisión ha modificado en el artículo 1.º de su despacho, al reformar el artículo 264 del código civil.

Sr. Presidente (Goyeneche). — No observándose, queda aprobado el artículo, con la salvedad a que se ha referido el señor diputado Melo.

—Sin observación, se dan por aprobados los artículos 6.º y 7.º.

—En discusión el artículo 8.º.

Sr. Caracoche. — Pido la palabra.

Me parece que podría cambiarse la palabra "definitiva" por la de "exclusiva", pues ésta expresaría mejor el concepto del artículo.

Sr. Melo. — La comisión ha redactado así este artículo de su despacho porque existiendo una prescripción del código civil que establece que los niños admitidos en los hospicios o casas de expósitos por cualquier título y por cualquier denominación que sea estarán bajo la tutela de las comisiones administrativas, hemos querido generalizar esa regla para todos los casos en que se confíen menores a un establecimiento de beneficencia por sus padres, tutores o guardadores, por que se estaba explotando por malos padres la acción tutelar de la sociedad de beneficencia, entregándole menores que requerían cuidado hasta la edad en que podían trabajar, reclamándolos cuando ya estaban en condiciones de hacerlo por su edad y en virtud de la educación que la misma sociedad les había hecho dar en sus establecimientos propios; y llevándolos para vivir a costa del trabajo de esos niños. Concluimos así con esa explotación. En cuanto a la expresión "exclusiva" le diré al señor diputado que la tutela es exclusiva, salvo la intervención del ministerio de menores.

Sr. Caracoche. — Pero me parece que la palabra "exclusiva" expresa mejor el pensamiento, porque decir "definitiva" es darle a la tutela un carácter permanente.

Sr. Melo. — Eso es lo que perseguimos con este artículo.

Sr. Agote. — Es precisamente una tutela de carácter permanente.

Sr. Caracoche. — Mientras están en el establecimiento.

Sr. Agote. — No, señor; es permanente porque una vez que el establecimiento público o privado se ha hecho cargo del menor, éste queda en forma definitiva bajo su tutela.

Sr. Melo. — La tutela entre nosotros es exclusiva, señor diputado, salvo, como he dicho, la acción del ministerio de menores, de manera que esa palabra holgaría. Hemos empleado la palabra "definitiva" porque hemos querido consagrar por este artículo que la sociedad de beneficencia, que ha recogido a los niños que le han sido entregados por sus padres, tutores o encar-

gados, que los han educado que los han alimentado, que los han enseñado a trabajar, tiene derecho a salvarlos definitivamente sustrayéndolos a la explotación inmoral de los que se los entregaron.

Esta disposición está basada en la experiencia. La sociedad de beneficencia nos ha expresado en una comunicación que existe la necesidad de resolver la situación que continuamente se le presenta, por una gran cantidad de casos en que los padres, después que los hijos han adquirido hábitos de trabajo, van a retirarlos para explotarlos.

Sr. Presidente (Goyeneche).—Se va a votar el artículo 8.º, tal cuál figura en el despacho de la comisión.

—Resultado afirmativa.

—Sin observación, se aprueba el artículo 9.º

—En discusión el artículo 10.

Sr. Molina. — Pido la palabra.

Sin pretender hacer una oposición a fondo a este artículo y teniendo en cuenta que los miembros de la comisión son hombres muy entendidos en esta materia, debo por consiguiente hacer mis observaciones con cierta timidez.

Encuentro que ese artículo compromete principios fundamentales y puede poner en peligro la tranquilidad de las familias. Se trata de autorizar denuncias de cualquier persona del pueblo sobre hechos que pasan en el seno del hogar.

La patria potestad se pierde o se suspende, según los casos que especifica el artículo 3.º, que modifica los artículos 307, 308 y 309 del código civil; prevé el caso por ejemplo, de la pérdida de la patria potestad cuando los padres tratasen a sus hijos, sin motivo, con excesiva dureza o si por consecuencia de su ebriedad, inconducta notoria o negligencia grave, comprometan la salud, seguridad o moralidad de los hijos. Si estas causas pudieran estar entregadas a la mala voluntad de cualquier persona del pueblo, que deseara turbar la tranquilidad de un hogar, haciendo denuncias infundadas sobre hechos difíciles de apreciar, pon-

dríamos en la picota pública a muchos hogares.

Hubiera preferido que la comisión arbitrara el medio de impedir esta especie de acción popular que establece el artículo 10, como otras legislaciones lo han hecho.

En Francia, por ejemplo, existe el consejo de familia, que tiene a su cargo los intereses de los menores y que puede, en cierta forma, corregir las irregularidades que note en una familia.

Según los términos amplios del artículo en discusión, se ofrece al primer venido, al primer individuo que por venganza o por cualquier otro motivo quiera molestar a una familia, la oportunidad de poner en duda la honestidad de la madre, por ejemplo, que ejerza la patria potestad, y esto es un caso grave, o la honestidad del padre. Me parece que habría que reflexionar un poco, antes de sancionar este artículo. Hago estas consideraciones con motivo de dudas muy serias, que experimento en presencia de tal disposición tan ampliamente formulada.

Entregar el hogar, que debe ser sagrado, a la inquisición y la investigación del primer atorrante que pase por la calle, aunque no resulte fundada su denuncia, es sumamente peligroso, porque siempre quedará el "venticello" de la calumnia causando males tal vez irreparables a las personas objeto de la denuncia malevolente.

Yo no sé si sería tal vez mejor suprimir el artículo y dejar a la prudencia de los jueces admitir o no las denuncias. Yo no sé si sería mejor proponer un sistema más radical en esta emergencia, llegando a la institución de algo que realmente falta entre nosotros: el consejo de familia. No se me oculta, señores diputados, que es necesario poner un remedio a los actos de los padres que violan sus sagrados deberes. No se me oculta que debe haber en la sociedad, y que hay efectivamente, muchos casos en que el padre y la madre den ejemplos inmorales a sus hijos; pero puede haber muchos hogares honestos que estén expuestos a una denuncia de mala fe, y entonces

yo no hago en este caso, señores diputados, sin ahondar la cuestión, otra cosa que someter a hombres tan preparados como son los miembros de la comisión, esta duda que en estos momentos agita mi espíritu para poder votar con tranquilidad el artículo.

Nada más.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

Agradezco en nombre de la comisión, los conceptos benevolentes, que, viniendo de una persona autorizada en materia jurídica como el señor diputado, tienen un doble valor. Debo decirle que efectivamente la comisión ha estudiado con cuidado este despacho y que las observaciones que el señor diputado formula han sido tenidas en cuenta al redactar este artículo. En primer lugar el señor diputado nota, por la lectura analítica de él, que se trata de una denuncia judicial: se trata de denuncias, es decir, de informaciones a los defensores de menores; no se trata de una denuncia judicial: se trata de denuncias.

Antes de expresar de dónde hemos tomado este sistema, diré que en el régimen actual del código civil no existe el consejo de familia. Sin embargo, existen disposiciones según las cuales los jueces pueden en casos determinados privar a los padres de la patria potestad. No dice quién llevará al juez la denuncia de los hechos; de modo que puede formularla cualquiera, quiere decir que ya estamos en la situación a que el señor diputado se refiere dentro del régimen presente de nuestro código civil.

Pero voy más lejos. Existen en la capital cerca de doce mil niños, entre delincuentes y abandonados o expuestos moral y materialmente. De modo que la imagen que el señor diputado tiene en su espíritu, que es la de un hogar bien constituido, moralmente organizado, previsor y cuidadoso, en que se atiende a la educación moral y al bienestar material de los hijos, está completamente fuera de la reglamentación de esta ley; ese es el caso normal. Lo que la ley ha querido es proteger a los niños abandonados o expuestos por sus padres, y era necesario adoptar para eso un sistema eficaz. El siste-

ma que se ha adoptado, no saliendo del régimen actual en cuanto a la denuncia, lo ha adoptado teniendo en cuenta los excelentes resultados que ha dado en otros pueblos más avanzados en civilización que la República Argentina me refirió a los Estados Unidos. En este país como los señores diputados saben, las leyes civiles como las leyes penales son leyes locales, leyes de los estados. Y bien: en los estados particulares de los Estados Unidos se practica el sistema de la información en este mismo sentido, con la diferencia de que la información se hace directamente al juez.

Voy a molestar a la honorable cámara con la lectura de un formulario de un estado de la Unión: el Illinois. No quiero hacer la lectura de otros análogos. Dice el formulario: "Tribunal de niños. Fórmula número 1.— Petición: niño en peligro moral. — Estado de Illinois. — Tribunal del circuito del condado de... — Año 1900 y tantos. — Al honorable juez del tribunal de circuito del condado de... — El firmante, persona honorable, habitante del condado, os informa respetuosamente que fulano de tal, nacido en... encontrándose actualmente en dicho condado, es un niño en peligro moral a consecuencia de... y que es por eso que el peticionante ruega al tribunal hacer una investigación sobre el estado de peligro moral alegado respecto de dicho niño y sobre la veracidad de los hechos expuestos y que conforme a las leyes establecidas para tales casos, se tomen las medidas que considere útiles y convenientes el tribunal. Como es su deber, el firmante os ruega, etc., etcétera".

De manera que la comisión al redactar el artículo 10 ha tenido presente la experiencia de otros pueblos de los más cultos, entre ellos el norteamericano, citado, y ha tenido también en cuenta el propósito de no apartarse del sistema argentino de denuncia por cualquiera del pueblo, agregando sólo que debe ser persona capaz y que la denuncia debe hacerse al defensor de menores. Esta es la respuesta que la comisión puede dar a la pregunta del señor diputado.

Sr. Molina. — Pido la palabra.

Yo sabía que la comisión había tomado esta disposición de algunos códigos locales de los Estados Unidos.

Podría replicar, en primer término, al señor miembro informante, que las legislaciones dependen mucho del medio al cual se aplican. En ciertos pueblos existen reatos que no son comunes a otros. Así, por ejemplo — y creo que no hago sino contestar un hecho que muchos señores diputados abogados habrán comprobado en su experiencia de la vida diaria entre nosotros — podría referirme a la eficacia del juramento. En nuestro país se respeta poco el juramento; un testigo miente a pesar del juramento que presta. En Inglaterra, en cambio, se tiene un alto concepto del juramento, a tal punto, que en el procedimiento inglés un dependiente o un empleado puede ser presentado por el patrón como testigo y no le afecta la tacha que establecen nuestras leyes para esos casos. De modo que es evidente que cada legislación tiene que consultar las costumbres especiales del pueblo a que ha de aplicarse.

Desde luego, de haré notar al señor miembro informante que las denuncias son llevadas, en esas legislaciones, directamente al juez. No es lo mismo el juez que el defensor no detrado u otro empleado cualquiera, porque el juez puede castigar o desestimar la denuncia. Si se dijera que en vez de ser obligatorio para los defensores de menores admitir la denuncia, pudieran aceptarla o no, si no la encontraran justificada "prima facie", eso sería una mejoría para el artículo que me decidiría a votarlo.

Sr. Carrasco. — Es lo que iba a proponer.

Sr. Molina. — De manera que si la comisión aceptara una modificación en ese sentido, yo votaría el artículo con menos escrúpulos que los que tengo ahora. En otra forma me parece que es sumamente peligroso y que por evitar un mal podríamos incurrir en otro.

También podría discutirse si la denuncia conviene para todos los casos.

Puede aceptarse la denuncia en ciertos casos graves, como los malos tratamientos, la corrupción de menores exteriorizada por actos visibles, pero no puede admitirse para otros casos menos graves.

De todas maneras, como no es posible improvisar legislación tan grave en el curso de un debate y debemos mantener la unidad del despacho de la comisión — criterio que yo generalmente sigo cuando se trata de modificaciones parciales, respetando en lo posible el concepto de una comisión que ha estudiado y madurado un asunto — yo votaría este artículo si la comisión estableciera en alguna forma que el defensor de menores podría rechazar de plano una denuncia si la encontrara "prima facie" injustificada.

Sr. Carrasco. — Pido la palabra.

Considero que los escrúpulos manifestados por el señor diputado por la capital son justos y razonables, pero creo que si no votáramos el artículo dentro del pensamiento que se han propuesto la comisión y el autor del proyecto, malograriamos su intención.

No tendríamos a seguir, entonces, sino uno de estos dos procedimientos: o limitar la facultad de la denuncia a los miembros de la familia, en cuyo caso los hogares disueltos y los salidos de esos hogares disueltos no tendrían la protección del estado, que el proyecto se propone, o si no suprimir totalmente el artículo. Pero ninguno de los dos procedimientos sería viable.

La denuncia por cualquier persona capaz, hecha al defensor de menores verbalmente, sin forma de juicio, tendría por objeto que el defensor tomara él mismo las medidas que creyera oportuna para investigarla en forma sumaria y con toda la discreción con que un magistrado, con que un representante del estado puede hacerlo, y dada la gravedad de esa denuncia, y según el juicio personal que le mereciera ese sumario, casi verbal, sin actuación, iniciará él, si lo creyera conveniente, la denuncia ante el juez.

Votaría, pues, el artículo si la comisión lo aceptará en estos términos: "las denuncias sobre los hechos men-

cionados en los artículos anteriores podrán ser presentadas verbalmente a los defensores de menores por cualquier persona capaz, debiendo el defensor iniciar una información sumaria y someterla al ministerio público de menores, para la iniciación del juicio, si lo creyera conveniente”.

Quedaría librada al criterio reposado y sereno de un magistrado de esta situación grave que preocupa al señor diputado por la capital.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

La comisión desearía salvar todas las dificultades, pero el inconveniente que por mi parte encuentro al agregado — no puedo consultar a toda la comisión porque no se encuentran presentes todos sus miembros — es que quedaría la acción pública al arbitrio del defensor.

Sr. Carrasco. — Al criterio del defensor, y no al criterio de cualquier persona del pueblo.

Mr. Melo. — No queda al criterio de cualquier persona del pueblo, — y pido que noten esto los señores diputados; — la persona del pueblo hace la denuncia, y entonces el defensor inicia una información sumaria y la somete al ministerio público.

Sr. Carrasco. — La somete, o no. Esa sería la reforma. Si lo creyera conveniente, si él deduce de esa información sumaria, semiprivada, realizada con la discreción natural a todo magistrado, que procede la denuncia, le da curso; si considera que no procede, no se lo da.

Sr. Melo. — El temor está en que el defensor de menores abandone sus deberes.

Sr. Carrasco. — Ese temor está en todas partes.

Sr. Melo. — Por eso hemos tratado de asegurar el cumplimiento de ellos estableciendo la obligación de iniciar la información. Si ella da resultados debe el defensor continuar el procedimiento y ello no queda a su arbitrio.

Sr. Carrasco. — Nunca va a asegurar el señor diputado la labor personal de nadie.

Sr. Melo. — Por esta disposición está asegurada; cuando no cumple su

obligación, verá el señor diputado lo que establecen los artículos últimos.

Sr. Carrasco. — La ley establece que todos los jueces deben dictar sus sentencias en términos perentorios, y no se dictan jamás, a pesar de la ley.

Sr. Melo. — Eso es por otras razones: porque todos los resortes que se refieren a la función judicial están quebrantados, desde el juicio político, que es el supremo resorte.

Sr. Carrasco. — Es una condición humana, señor diputado.

Sr. Agote. — Creo, señor presidente, que cuando se hace una acusación injusta, el que la hace carga con la responsabilidad.

Sr. Molina. — ¿Y cuándo no tiene responsabilidad?

Sr. Agote. — Toda persona que hace una acusación calumniosa, está sujeta a disposiciones del código, que establecen sanciones para esos casos.

Sr. Molina. — No tiene responsabilidad sino en el caso de que la denuncia sea calumniosa, es decir, cuando constituye un delito.

Sr. Agote. — ¿Y después, señor diputado?

Sr. Molina. — En esta materia me va a perdonar el señor diputado si me permite hacer la observación, pues es la mía.

Sr. Agote. — Me va a permitir el señor diputado que le haga una observación gentil, como me agrada hacérselas.

Sr. Molina. — Como sólo es capaz de hacerla el señor diputado.

Sr. Agote. — El señor diputado me recuerda mi incapacidad en materia jurídica, lo que me obligaría a guardar silencio en un asunto al que no traigo en verdad mayores conocimientos de orden jurídico. Pero traigo en cambio conocimientos de la vida práctica porque ser médico, señor diputado, es conocer muchas cosas que no todo el mundo ve, porque entramos al hogar hasta la parte íntima de los hogares y conocemos los dolores humanos y los palpamos como no los palpa el señor diputado.

Sr. Molina. — La simple denuncia de un hecho que no constituye delito y aún la denuncia de un hecho que cons-

tituyera delito, no hace responsable por nuestra ley penal ante los tribunales al autor de la denuncia. De modo que un individuo que denuncia simplemente hechos inmorales, puede quedar perfectamente a cubierto de la acción de calumnia desde que no imputa delito.

Véase todo lo grave que es este artículo que permite, que obliga al defensor a hacerse eco de informaciones y a llevarlas a conocimiento del ministerio público, con lo que puede hacerse un arma, un recurso electoral, por ejemplo, para desprestigiar a un hombre político.

A mí me parece que la comisión debe aceptar esa modificación que proponemos con el señor diputado por Santa Fe. Es una modificación de prudencia. No podemos partir nosotros de la base de que los funcionarios sean malos funcionarios. Si son malos funcionarios se les castigará; esa es la regla, porque una sociedad que no tenga fe en su administración de justicia y en sus funcionarios, es una sociedad desquiciada, sin base alguna de legislación posible.

Es necesario partir de la suposición de que los magistrados van a cumplir con su deber. Nunca se podrá partir del concepto contrario, es decir, de que los magistrados no van a cumplir con su deber, porque entonces no valdría la pena de dictar leyes, ni de organizar la sociedad.

Sr. Carrasco. — Además, el denunciante, en el caso de que un magistrado no cumpliera con su deber, tendría derecho de insistir hasta tanto lo cumpliera.

Sr. Melo. — ¿Me permite el señor diputado una interrupción para facilitar el debate?

Sr. Molina. — Sí, señor diputado.

Sr. Melo. — Como los señores diputados recuerdan, el artículo 309 del código civil dice: "Los jueces pueden privar a los padres de la patria potestad si tratasen a sus hijos con excesiva dureza o si les diesen preceptos, consejos o ejemplos inmorales". Y como la denuncia puede hacerla cualquiera del pueblo, yo no veo que hemos agregado algo existente.

Sr. Molina. — Deseaba ponerle a la comisión ante sus ojos estas dos situa-

ciones: si aceptamos el artículo nos exponemos a toda clase de abusos, si lo contrario, exponemos a los menores a que queden descuidados. Entre dos cosas yo le propongo a la comisión un término medio: que aceptemos el artículo pero que dejemos librado al criterio del magistrado el llevar adelante la denuncia, porque el solo hecho de hacer una denuncia y llevarla al ministerio público puede causar males irreparables a las personas objeto de ella, y sabido es que estas denuncias pueden ser injustas como pueden también ser justas. Esto es lo que yo quería dejar señalado para terminar.

Sr. Melo. — Siento molestar a la honorable cámara; pero debo decir que me parece que la comisión no puede aceptar...

Sr. Avellaneda (N. A.). — Estoy de acuerdo, señor diputado.

Sr. Melo. — Puedo ahora, pues, con la opinión del señor diputado, si forma mayoría, decir a la cámara que la comisión no puede aceptar el agregado propuesto, porque ese es el régimen actual, pues los jueces pueden privar a los padres de la patria potestad en ciertas condiciones que el código civil señala, y cualquiera puede hacer la denuncia, y lo mismo sucede con las denuncias de los delitos que son mucho más graves y que cualquiera puede hacerlas.

Ya ven los señores diputados que no agregamos nada...

Sr. Molina. — ¿Se puede llevar la denuncia de un delito privado ante el juez? Le ruego al señor diputado que me conteste con toda su competencia jurídica.

Sr. Melo. — Las denuncias a que se refiere esta ley se refieren a hechos de orden social, de orden público.

Sr. Carrasco. — Que afectan a la familia, que es muy respetable.

Sr. Melo. — Precisamente, afectan a la familia y a la sociedad; ésta interviene en nombre de derechos superiores; los derechos de los niños a la vida material, moral e intelectual, los derechos de la sociedad a su propio porvenir que está en los niños; que cuando hay una familia desquiciada, el conta-

gio se extiende; los niños abandonados, los niños puestos en peligro, los niños delincuentes son productos de la miseria moral y material o de ambas, que a su vez tiene causas sociales y remedios que únicamente la sociedad entera puede aplicar. Es una justicia digna de hombres cultos la que cuida de los niños y del porvenir en ellos, llevando su cuidado a dar derecho (y yo creo que es una obligación, y a ello hemos de llegar), a todos los hombres capaces a denunciar la existencia del abandono o del peligro de los niños para proveer en seguida a su salvación.

Sr. Carrasco. — La cuestión está en saber la oportunidad en que se debe intervenir y no el derecho de intervenir.

Sr. Melo. — Disculpeme el señor diputado, pero deseo completar mi argumentación.

Deseaba decir que si la comisión ha agregado algo a lo que existe ya, en el sentido del derecho a la denuncia en lo civil y en lo criminal, lo que ha agregado revela un criterio de prudencia; pues en vez de llevarse la denuncia a los jueces se lleva, según el despacho, a los defensores de menores, que después de haber hecho la información se encontrarán con que, o no hay nada y entonces no llevarán la cuestión adelante, o si hay algo procederán en consecuencia.

Ven, pues, los señores diputados cómo el artículo ha sido redactado con gran previsión, por lo que debe votarse tal como ha sido redactado.

Sr. Avellaneda (N. A.). — Artículo que está en concordancia con los códigos civil y penal. No se ha establecido ninguna novedad, ni importa la disposición peligro alguno.

Sr. Mouesca. — Me parece que estamos haciendo una discusión sin motivo.

El código civil acuerda facultades a los defensores de menores, en la representación promiscua que les da, con los padres de familia. Supongamos el caso de un defensor a quien se le lleva la denuncia de malos tratos a menores. Aún no existiendo este artículo, ¿investigará o no lo que pasa en el hogar de que se trata? He sido defensor y ten-

go alguna práctica en estos asuntos. Así en algunos casos hasta he llevado ante la justicia del crimen a padres de familia en virtud de denuncias hechas por terceros y lo he hecho de acuerdo con facultades acordadas por la ley. De manera que se sancione o no el artículo en cuestión, es indistinto. De acuerdo con las disposiciones vigentes, siempre el defensor de menores atenderá esas denuncias.

Sr. Molina. — ¿De manera que el artículo sería absolutamente innecesario?

Sr. Mouesca. — Así es, señor diputado.

Sr. Carrasco. — Entonces mejor sería aclararlo, así cuando lo creyera conveniente, en el caso expuesto por el señor diputado, el defensor acusará.

Sr. Melo. — No, porque se trata de una ley de otro orden. Dentro del régimen individualista existente...

Sr. Carrasco. — El pensamiento de la comisión es que el defensor de menores ha de estar obligado a llevar a presencia del juez una denuncia.

Sr. de Tomaso. — Que ha de estar obligado a levantar siempre una información sumar a.

Sr. Carrasco. — Pero no a llevar una denuncia.

Sr. Melo. — Sí; pero si de la información resultara que no hay nada...

Sr. Molina. — Con la aclaración que se ha hecho está perfectamente bien el agregado.

Sr. Carrasco. — En esa forma estamos de acuerdo.

Sr. Melo. — No hay nada que agregar, pues. Que se vote.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se va a votar el artículo 10.

—Resulta afirmativa.

—Sin observación, quedan aprobados los artículos 11 a 20.

—En discusión el artículo 21.

Sr. Agote. — Pido la palabra.

Yo voy a proponer a los señores miembros de la comisión una modificación, que creo va a conciliar sus ideas con las mías, en lo relativo al procedimiento, porque en el fondo del asunto todos estamos de acuerdo. Me refiero a lo dispuesto en este artículo, al de-

finir el abandono material o moral, comprendiendo como tal las profesiones en la vía pública, no autorizadas. Y en otro proyecto de ley, la comisión reglamenta las profesiones de los niños e incluye entre ellas la venta de diarios en determinadas condiciones, agregando en el artículo 8.º de aquel proyecto, que perderán la patria potestad los padres que no cumplan sus preceptos.

Yo voy a proponer a la comisión lo siguiente... Ruego al señor diputado Melo que me escuche, porque es él, como miembro informante, quien me tiene que responder y no deseo hablar en el vacío.

Sr. Melo. — Le va a responder el señor secretario de la comisión, doctor de Tomaso.

El señor diputado Martínez trata de convencerme de que debemos aceptar la proposición del señor diputado... *(Risas)*.

Sr. Martínez (E.) — Como miembro de la comisión de legislación que he entrado a integrar después de despachado este proyecto, había conversado con el señor diputado Agote, y estaba hablando con el presidente de la comisión para manifestarle mi opinión favorable a la proposición del señor diputado Agote.

Sr. Agote. — Yo no dudo de la buena voluntad del señor diputado, pero yo me pongo en el caso de que tenga que convencer a la comisión. El señor diputado Martínez me ha manifestado su opinión favorable y se lo agradezco, pero como es al doctor Melo a quien me interesa convencer, yo no deseo hablar en el vacío.

Lo que dije es esto: que es...

—El señor diputado Avellaneda (M. A.) dice unas palabras en voz baja al orador.

Este es un asunto, señor presidente, que aunque le moleste al señor diputado Avellaneda, es muy grave.

Sr. Avellaneda (M. A.). — A mí no me molesta; nada.

Sr. Agote. — Me refiero al señor diputado Marco Aurelio Avellaneda.

La gravedad de este asunto hace que importune a la cámara, pero tratán-

dose de cumplir con un deber no hay razón ni consideración que pueda detenerme, tanto más cuanto que pacientemente escucho a todo el mundo.

El proyecto a que me refiero dice: Se entenderá por abandono material o moral...; y después de varias clasificaciones establece:... aquellos menores que no habiendo cumplido diez y siete años de edad, vendan periódicos, publicaciones u objetos de cualquier naturaleza que fueran, en las calles y lugares públicos; cuando ejerzan oficios lejos de la vigilancia de sus padres o guardadores y cuando sean ocupados en oficios o empleos perjudiciales a la moral o a la salud.

Esto no debe faltar en una ley de protección a la infancia, señores diputados y no debe faltar por lo que tantas veces se ha repetido sobre el peligro que representan los vendedores de diarios. Yo tengo aquí sobre mi banca los anales de psiquiatría y criminología, donde figura un trabajo hecho por el doctor Ingenieros, como miembro informante de una de las secciones del congreso de la prensa, para estudiar lo que hay de verdad en este llamado oficio de vendedores de diarios, que no es tal oficio sino una simulación, porque de los niños que venden diarios sólo el diez por ciento lo son en realidad y los demás son vagos a quienes adultos explotan de una manera inicua.

Las etapas de esta carrera de la vagancia y el crimen son las siguientes: Los padres mandan a los niños a vender diarios, y el primero, segundo y tercer día reciben el producto obtenido de la venta. Pero en seguida los niños juegan el dinero o se lo gastan en golosinas y cuando llegan a sus casas, el producto de la venta se halla muy disminuido. Entonces los padres los castigan, y después de dos o tres correcciones, generalmente un poco fuertes resuelve el niño no volver más a su casa y viven robando en los mercados, en los mataderos, durmiendo en las puertas de las casas, y fatalmente caen a la vagancia y después en el crimen.

Es necesario no equivocarse y conocer la psicología infantil. El niño es ratero, es mentiroso, es incendiario, comete sinnúmeros de faltas, aunqu-

haya nacido en el hogar más respetable y más moral. Son las correcciones de los padres las que van corrigiendo el sentido simplista del niño, que lo lleva, por ejemplo, a tomar lo que le gusta, lo que le atrae por su sabor o por su brillo; esa es una forma de robar que los padres corrigen, pero que en el caso de los desgraciados que no tienen esa vigilancia de los padres dan lugar a que se los lleve a la comisaría, y hasta que el niño permanezca durante cierto tiempo en un calabozo para que pueda convertirse en criminal.

Y no debe llamarles la atención a los señores diputados mis palabras, porque hace ocho o diez días que los diarios traen crónicas sobre un chicuelo que robó un riñón en una carnicería y fué entregado, no se sabe si por el comisario o por quién, al juez y ha sido absuelto. Tanto el comisario como el dueño de la carnicería hoy no quieren aparecer como habiendo sido los causantes de haber llevado a ese niño a la última de las pocilgas es decir, al calabozo de una comisaría.

Tengo en mi banca — no las voy a leer por no cansar la atención de la cámara — varias sentencias de jueces condenando por reincidentes a chicos de diez, once y doce años de edad. Si se buscan los antecedentes de estos pequeños criminales, se encuentra que son lustrabotas, vendedores de diarios o mensajeros, todos estos mal llamados oficios, que no son más que la explotación de la infancia desvalida y abandonada. Yo tengo la convicción profunda de que nuestra ley falla si no llegamos a suprimir este cáncer social que representan 12 a 15.000 niños abandonados moral y materialmente, que no conocen familia porque es necesario saber que hay muchísimos padres que vienen como inmigrantes y abandonan a los niños a la entrada porque les incomodan; los dejan en los terrenos del puerto donde se alimentan con toda clase de inmundicias y con lo que su mayor o menor habilidad les permite obtener. Otras veces la familia los abandona porque no los puede proteger.

Es necesario decir que nuestras sociedades de caridad y de beneficencia son abnegadas, altruistas, entusiastas;

pero no saben hacer estas cosas bien y muchísimas veces sus esfuerzos se pierden por una serie de canales que no hay por qué clasificarlos, porque no quiero poner una sombra sobre gente que hace tanto bien con todo entusiasmo y con toda nobleza.

Tenemos organizadas algunas de esas sociedades en una forma admirable y científica. Por ejemplo, la institución de las cantinas maternas hace de tal manera, que podría servir de modelo al estado, para organizar esta función. Pero esa sociedad sólo cuida los niños hasta los dos años, porque no puede hacer más. De los dos hasta lo ocho años, edad en que la escuela los llama, — cuando van a las escuelas — esos niños quedan completamente abandonados. Ni sus padres ni la sociedad intervienen para suministrarles los recursos de que carecen.

En esas condiciones los niños no son sino una carga para la familia, y la venta de diarios es un recurso que responde a las exigencias: primero, librarse de los muchachos en las casas, y segundo, los pocos centavos que los muchachos traen a la noche y que aumentan las entradas de la familia, siempre escasas.

Y a este paso van siguiendo la escuela hacia el crimen. Entonces deseo que la ley lleve esta disposición, porque la otra queda supeditada a las contingencias de otra ley que si se sanciona va a completar el pensamiento de la comisión y que va a realizar una buena obra indiscutiblemente, pero que si no se llega a realizar, esta ley que estamos sancionando va a quedar con un enorme vacío y no se va a suprimir así una de las fuentes más fecundas de la criminalidad.

Está probado que el 50 por ciento de los individuos que están en las prisiones y que residen desde la niñez en nuestro país, ya sea por su nacimiento o porque han llegado a corta edad, han sido vendedores de diarios.

De manera que aun siendo excesiva en la ley esta disposición, es necesario que garanticemos el propósito de la ley y la comisión no debe hacer hincapié en esto que no es más que traer lo hecho en otra parte para completarla.

ley; habremos puesto así una llave a esta corriente del crimen, que cada día que pasa es motivo para nosotros de una crítica muy severa.

Sr. de Tomaso. — Pido la palabra.

En nombre de la comisión debo decirle al señor diputado que no podemos aceptar el agregado que propone porque estamos de acuerdo con él. Lo hemos legislado en otro despacho que figura en la orden del día número 86 y la comisión va a pedir que se vote como complementario de esta ley.

Los despachos tratan dos aspectos de la cuestión. En este que estamos discutiendo, legislamos todo lo que es materia de derecho civil y criminal. Si en el artículo 21 fijamos bien un principio general al decir que una de las maneras de abandonar moral y materialmente a un menor por parte de los padres, es hacerle ejercer profesiones en la vía pública no autorizadas, en el despacho contenido en la orden del día número 86 desenvolvemos ese principio y determinamos cuáles son las profesiones que no pueden ejercerse hasta cierta edad en la vía pública y cuáles son las que pueden ejercerse desde cierta edad en adelante. Si nosotros aceptáramos la proposición que nos hace el señor diputado, desarticularíamos nuestro trabajo y quizá contribuiríamos a que luego la cámara, con el pretexto de que ya ha dictado un proyecto de ley que roza este asunto, no trate la orden del día número 86, que, lo repito, en nuestro concepto, forma un todo concordante con este.

Pedimos, pues, a la cámara que vote el artículo 21 tal como está redactado y que, inmediatamente de votado este proyecto, entremos a discutir la orden del día número 86, que es muy breve, y con la cual alcanzará el señor diputado una legítima satisfacción para su propósito de combatir el trabajo de los menores en la calle. El señor diputado, que ha leído la orden del día número 86, sabe que hemos contemplado el pensamiento que a él le preocupa en toda su extensión, porque no solamente nos ocupamos del trabajo de menores dedicados a vender diarios, sino que nos referimos también al trabajo de los que venden fósforos, cigarrillos, flores, bi-

lletes de lotería o cualquier otro objeto, o a los que son lustradores y mensajeros.

De manera que, si el señor diputado quiere trabajar por su propio pensamiento, lo mejor que puede hacer es no proponer ningún agregado, a fin de contribuir a que terminemos más rápidamente con esta orden del día y entremos a tratar la número 86.

Sr. Agote. — Pido la palabra.

El señor diputado somete la eficacia de esta ley a las contingencias de otro proyecto de ley. El señor diputado empieza por decir que, en terminando ésta, entraremos a tratar la otra orden del día, pero detrás he oído la voz negativa. Yo, por mi parte, le acompaño al señor diputado y lo voy a acompañar a sancionar también aquella.

Sr. de Tomaso. — ¿Cómo va a ser negativa, si la comisión manifiesta a la cámara que entiende que sus dos despachos forman uno solo, que les ha redactado con ese concepto? Además, según me hace observar el señor presidente de la comisión, detalle que yo había olvidado, parece — el señor secretario podría confirmarlo — que la cámara ya ha resuelto tratar la orden del día 86 inmediatamente de terminado este proyecto de ley sobre patronato de menores; y lo ha resuelto a proposición del señor diputado Bunge.

Sr. Araya. — Así es: a proposición del señor diputado Bunge.

Sr. Agote. — Nosotros olvidamos que tratamos una ley; parece que olvidamos que tratamos un asunto que tiene que ser estudiado por las dos cámaras. Este proyecto, si los señores diputados lo hubieran completado, poniendo el uno incluído en el otro, hubiera sido mejor. Pero en este caso, señor presidente, la comisión ha clasificado las circunstancias en las cuales se considera abandonado moral o materialmente un niño, y entre esas circunstancias dice: la mendicidad o la vagancia por parte del menor, su frecuentación a sitios inmorales o de juego, con ladrones o gente viciosa o de mal vivir, el ejercicio de profesiones perjudiciales a su salud física o moral. Luego, señor presidente, agregar una clasificación más

a lo que la comisión ha clasificado en este artículo, no lo saca del concepto.

Sr. de Tomaso. — Pero las leyes posteriores que votemos podrán incluir dentro del concepto de profesiones no autorizadas en la vía pública, todas las que se quiera; no solamente la venta de diarios y las otras a que se refiere la orden del día 86, sino cualquier otro género de actividad que pueda practicarse en la calle.

Sr. Agote. — Sí, señor diputado, y por eso es que la comisión, que ha puesto en su artículo ocho o diez condiciones, no quiere poner esta última, porque el señor diputado cree — y éste es el eje de la cuestión: lo acaba de decir a la cámara — que la cámara, habiendo salvado esto, no se va a interesar por lo otro; y como teme que lo otro no se trate, sacrifica este pensamiento fundamental, que es de poner esta prohibición de la venta de diarios a menores de 17 años de edad. Después la reglamentación de los menores de 18 años para arriba, hasta llegar a los 22, puede ser materia del artículo del proyecto de ley a que se ha referido el señor diputado, en tanto, que aquí se plantea de una manera definitiva que ningún menor de 17 años podrá vender, etc.

De manera que no contrario, absolutamente, el pensamiento fundamental de la comisión, sino que lo único que hago es impedir la posibilidad de trabajar un menor de 17 años en oficios que no son una simulación de vagancia y fuente fecunda para el crimen.

No hay que olvidar las exigencias de nuestra situación actual. Me es violento repetir muchas veces la misma cosa, pero repetiré que deseando estar bien informado sobre esta materia me he tomado el trabajo de visitar todas las cárceles y establecimientos penales de la capital...

Sr. de Tomaso. — Todo eso lo sabemos, señor diputado. Por eso hemos hecho un despacho aparte. El señor diputado está haciendo un discurso en general sobre los menores vendedores de diarios...

Sr. Agote. — No se impaciente el señor diputado.

Sr. de Tomaso. — No me impaciento. Es que el señor diputado está haciendo perder tiempo a la cámara.

Sr. Agote. — Esto no es perder tiempo, y puedo asegurarle al señor diputado que he puesto todas mis energías en llegar a obtener una legislación sobre esta materia. Hace nueve años que vengo luchando por esto con toda la decisión que nace del conocimiento de estas cosas, y resulta ahora que por temor de que no se sancione un proyecto que todavía no ha entrado a la discusión de la cámara, vamos a dejar un vacío en este proyecto de ley.

Sr. de Tomaso. — Pero eso está en su proyecto, señor diputado. Le repito que este despacho en sus líneas generales no es sino una copia del proyecto que había presentado el señor diputado.

Sr. Melo. — Permítame el señor diputado: no es una copia; es una adaptación con modificaciones.

Sr. Agote. — En esa ley a dictarse quedaría izeluida la prohibición a los menores de 17 años para arriba, para vender diarios, ejercer de lustrabotas, y demás, en tanto que en este proyecto de ley y con el agregado que yo propongo quedaría prohibido eso para los menores de 17 años; y esto, vuelvo a repetirlo, no afecta en nada al proyecto del señor diputado y con su sanción podremos decir que habremos hecho obra buena, noble y sana.

Sr. de Tomaso. — Pido la palabra. Simplemente para hacerle notar al señor diputado que el artículo 17 de su proyecto dice "ejercicio de profesiones notoriamente perjudiciales a su salud física y moral, de profesiones en la vía pública, y en general, etcétera, etcétera."

De manera que el artículo 21 de nuestro despacho es exactamente igual al que proponía el señor diputado. Recién ahora recuerda el señor diputado que una de las profesiones perjudiciales en la vía pública es la venta de diarios.

—Los señores diputados Agote y de Tomaso hablan simultáneamente.

De manera que todas esas críticas

que el señor diputado está haciendo al artículo 21...

Sr. Agote. — No le hago críticas.

Sr. de Tomaso. — ... u observaciones...

Sr. Agote. — Tampoco observaciones.

Sr. de Tomaso. — ... son aplicables al artículo 17 de su proyecto.

Sr. Del Valle. — Podría votarse el artículo.

Sr. de Tomaso. — Hago en nombre de la comisión esta observación. El señor diputado propone también en su agregado una edad que no es la fijada en el despacho, por lo cual antes de entrar a votarlo habrá que disentir el punto, porque la comisión sostiene, dentro del mismo pensamiento general del señor diputado, otro criterio en cuanto a la edad, al cual se ha llegado después de una concordancia de sus miembros.

Sr. Agote. — Acepto la edad propuesta por la comisión.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Habiendo sido observado el artículo 21, se va a votar.

Sr. Agote. — Podría votarse el artículo por partes: primero hasta donde dice "o con ladrones o gente viciosa o de mal vivir" y después el resto.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se va a votar por partes el artículo 21, de acuerdo con lo solicitado por el señor diputado.

Se votará la primera parte, hasta donde dice "o con ladrones o gente viciosa o de mal vivir", inclusive.

—Es aprobado.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se va a leer la segunda parte.

—Se lee la segunda parte del artículo 31 del despacho de la comisión, desde la palabra "el ejercicio de profesiones perjudiciales" hasta el final.

—Se vota, y es aprobado.

Sr. Agote. — ¿Por cuántos votos?

Sr. Secretario (González Bonorino). — Por 36, sobre 61 señores diputados.

Sr. Agote. — Pido rectificación. Algunos señores diputados no han enten-

dido el sentido de la votación, y han votado por error afirmativamente.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se va a rectificar la votación. Sírvanse ponerse de pie los señores diputados que están por la aprobación del despacho de la comisión en la segunda parte del artículo 21.

—Rectificada la votación, resulta negativa contra 30 votos.

Sr. Agote. — Corresponde votar ahora la fórmula que he propuesto.

Sr. Presidente (Goyeneche). — La secretaría va a leer la parte que propone el señor diputado por Buenos Aires en sustitución de la que ha sido rechazada.

—Se lee:

"... o que no habiendo cumplido diez y siete años de edad, vendan periódicos, publicaciones u objetos de cualquier naturaleza que fueren en las calles o lugares públicos, cuando en estos sitios ejerzan oficios lejos de la vigilancia de sus padres o guardadores, o cuando sean ocupados en oficios o empleos perjudiciales a la moral o a la salud".

Sr. de Tomaso. — Pido la palabra.

Se presenta ahora la cuestión a que hice referencia hace un momento.

El artículo 1.º del primer despacho de la comisión dice: "Ningún varón menor de 15 años ni mujer menor de 18 podrá trabajar, etcétera.

Sr. Agote. — Eso lo trataremos después, cuando se discuta el despacho correspondiente. Pondremos también 17 años.

Sr. de Tomaso. — Es que vamos a perjudicar el pensamiento fundamental de otro despacho. Esa es la prueba del error que se cometería al aceptar la proposición del señor diputado: ahora tendremos que entrar a discutir un pensamiento de fondo del otro proyecto.

Sr. Agote. — Acepto la edad que propone el señor diputado, la que establece el artículo 1.º del despacho a que se ha referido.

Sr. Presidente (Goyeneche). — De tal manera que la proposición del señor diputado por Buenos Aires quedaría modificada, estableciéndose la edad de 17 años en lugar de la de 18.

Sr. Araya. — Pido la palabra.

El señor diputado de Tomaso ha dicho, con perfecta razón, que se comete un grave error. En realidad, nosotros con esta resolución, desarticulamos el proyecto contenido en la orden del día 86 que no sólo es complementario de la disposición que propone el señor diputado, sino que encara la cuestión bajo todos los puntos de vista. El señor diputado no contempla sino la venta de objetos en las calles, y hay otras muchas profesiones y ocupaciones de menores que por ese proyecto se reglamentan o se prohíben. De manera que aceptando el artículo tal cual lo desea el señor diputado Agote, se les hace a los menores que él tanto pretende defender, el mal servicio de impedir la sanción de este otro proyecto de ley, que consulta su pensamiento y abarca, además una cantidad de puntos de vista que el señor diputado ni siquiera ha tenido en cuenta.

Sr. Agote. — Voy a acentar esas otras disposiciones, señor diputado.

Sr. Araya. — Es un exceso de amor propio del señor diputado.

Sr. Agote. — El amor propio es convencimiento.

Sr. Araya. — ... que desea colocar esa disposición como parte integrante del proyecto que ha presentado, y en ese sentido comete el gravísimo error de desarticular un proyecto de fondo.

La comisión ha tenido este propósito, al formular dos despachos: primero, completar el pensamiento del señor diputado; y segundo, no confundir en la legislación dos puntos de vista distintos, uno que se refiere al proyecto presentado por el señor diputado, que es de legislación civil, y otro que se refiere a la legislación social.

Sr. Agote. — Deje que venga el otro proyecto y entonces lo despacharemos.

Sr. de Tomaso. — Por eso estamos explicando a la cámara el pensamiento que ha guiado a la comisión, para que no haga estas cosas.

Sr. Agote. — Entonces mandemos el proyecto a comisión.

Sr. de Tomaso. — Ya veo que el temor que tenía está realizándose.

Sr. Agote. — Está haciendo argumentos forzados.

Sr. Araya. — Es que el señor diputado no conoce nuestro proyecto, no lo ha leído, y la prueba está en que recién preguntaba qué edad fijábamos en nuestro proyecto...

Sr. Agote. — No recordaba ese detalle, pero...

Sr. Araya. — Yo lo desafiaria...

Sr. Agote. — Y además, tengo derecho de no conocerlo, porque no está en discusión. Yo me estoy refiriendo al proyecto que está en discusión en este momento. Supóngase el señor diputado que mañana la cámara vote en contra...

Sr. Araya. — Permítame, el señor diputado; tengo yo la palabra.

Sr. Agote. — Si levanto la voz no es para mortificarlo, es...

Sr. Araya. — Es que el señor diputado no nos deja expresar nuestro pensamiento. Cuando él habla todos le escuchamos, pero cuando alguien quiere hablar en forma contraria al pensamiento del señor diputado, hace una cantidad tal de interrupciones que la cámara ni lo oye a él ni oye a los demás.

Sr. Agote. — Le pido mil disculpas: no volveré a interrumpir.

Sr. Araya. — Si los señores diputados quieren trabajar en pro de la idea del señor diputado por Buenos Aires. Doctor Agote, deben rechazar la adición que él propone para poder entrar a tratar este otro proyecto que es el complemento de sus mismas ideas. Ahora, si los señores diputados desean trabajar en contra de ese mismo pensamiento pueden votar la adición que él propone y al mismo tiempo habrán desarticulado el otro proyecto de ley que debía ser considerado inmediatamente que se terminara con éste y que forma en realidad parte integrante del mismo.

Sr. Agote. — Solamente quiero decir que esto no es nada más que poner en los proyectos que puedan presentarse o en los despachos...

Sr. de Tomaso. — No lo podemos cambiar en este momento. Comprenda eso el señor diputado, ya que ha estado hablando toda la tarde de la unidad del despacho.

Sr. Agote. — Parece que el señor di-

putado Araya, que ve la paja en el ojo ajeno, no ve la viga en el propio.

Sr. Araya. — ¡Había tenido la palabra el señor diputado? Yo no sabía... *(Risas)*.

Sr. Agote. — Pero lo escucho con mucho gusto, señor diputado.

Sr. Araya. — Es que tiene la costumbre de hablar siempre el señor diputado...

Sr. Agote. — Yo tengo verdadero placer en escucharle; lo único que he querido decir es que en el proyecto futuro que se discutirá oportunamente nos vamos a encontrar con esta traba: antes de los 17 años nadie podrá trabajar en la venta de diarios. Quiero decir que se modificará una cifra, pero quedará el concepto de reglamentación del trabajo de los menores.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

Des palabras voy a decir. Yo creo — discúlpeme el señor diputado por Buenos Aires — que sería un error hacer la modificación que propone porque el complemento de este despacho está en este otro proyecto.

Sr. Araya. — Forma parte integrante.

Sr. Melo. — La exposición tan interesante que el señor diputado por Buenos Aires ha hecho a la cámara, sobre la situación de los niños abandonados, que él conoce tan bien, revela la urgencia que hay en disentir el despacho de la comisión de legislación que contiene, bien articulado el pensamiento que el señor diputado enuncia y que él nos quiere dar en unas cuantas cláusulas que son incompletas: le diré que me parece que está conspirando contra su propio pensamiento, contra el trabajo que ha realizado durante años, a ir contra la organización que la comisión de legislación ha querido hacer, dando un despacho de fondo, de carácter general relativo a la patria potestad y al abandono de los niños, y haciendo el despacho complementario reglamentando el ejercicio de las profesiones de los menores, que es menos general.

El señor diputado comprenderá que si he guardado silencio hasta ahora, en virtud de una deferencia para con él, en virtud de conocer el empeño que

siempre ha puesto en librar a los niños de los peligros del trabajo en las calles, es porque creía que el señor diputado iba a ser convencido por las palabras de los señores diputados por la capital, Araya y de Tomaso; pero en vista de que no se convence, he querido decirle estas palabras para pedirle al señor diputado, que reflexione un momento y que tenga a bien no desarticular los despachos de la comisión, pues de esa manera irá íntegro su pensamiento, que es el nuestro. Hemos trabajado con tanta decisión y amor, estos despachos, que deseáramos que no sufrieran detrimento alguno, por una proposición que tendrá muy buena intención, pero que es incompleta, por la misma precipitación con que ha sido proyectada.

Sr. Agote. — Difícil se hace responder a unas palabras pronunciadas en el tono benevolente con que lo han sido las que acaba de decir el señor diputado por la capital. Pero yo me pregunto: ¿qué tiene que ver que en lugar de 15 diga 18? Parecería que se tratara de números cabalísticos: 15 y 18.

Sr. Melo. — No es eso, señor diputado.

Sr. Agote. — De manera que no he de agregar una palabra más al respecto, y que se vote.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado por Buenos Aires al artículo 21 en sustitución de la segunda parte de dicho artículo que ha sido rechazado.

Sr. de Tomaso. — Pido que se vote por partes y que se dé lectura de esta segunda parte para ver cómo queda el artículo con el agregado del señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se va a leer.

—Se lee nuevamente.

Sr. de Tomaso. — Antes de que se vote desearía que la secretaría me diese este dato: si el artículo 21 del despacho de la comisión ha sido votado en toda su extensión o simplemente hasta las palabras "salud física y moral".

Sr. Presidente (Goyeneche). — No, señor diputado; se ha votado hasta las palabras "o de mal vivir".

Sr. de Tomaso. — No tengo entonces ninguna observación que hacer.

—Se vota el agregado propuesto por el señor diputado Agote y resulta afirmativa, quedando el artículo 21 en la siguiente forma:

"A los efectos de los artículos anteriores, se entenderá por abandono material o moral, o peligro moral, la incitación por los padres, tutores o guardadores a la ejecución por el menor, de actos perjudiciales a su salud física o moral; la mendicidad o la vagancia por parte del menor, su frecuentación a sitios inmorales o de juego, o con ladrones o gente viciosa o de mal vivir, o que no habiendo cumplido 18 años de edad vendan periódicos, publicaciones u objetos, de cualquier naturaleza que fueren, en las calles o lugares públicos o cuando en estos sitios ejerzan oficios lejos de la vigilancia de sus padres o guardadores, o cuando sean ocupados en oficios o empleos perjudiciales a la moral o a la salud."

—En discusión el artículo 22.

Sr. Caracoche. — Pido la palabra.

Voy a proponer un pequeño agregado que iría como final del artículo 22. Dicho agregado es el siguiente:

"En estas escuelas y reformatorios regirá el trabajo de talleres y agrícola como principal elemento educativo de los menores reclusos, quienes serán parte en el beneficio pecuniario de su trabajo. Las colonias-escuelas y las colonias-reformatorios ubicados cerca de las ciudades o en pleno campo serán el tipo preferido de estas casas de prevención y de reforma de los menores".

No he de agregar ninguna consideración porque el agregado se funda por sí solo.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Acepta la comisión el agregado propuesto por el señor diputado por Buenos Aires?

Sr. Melo. — Pido la palabra.

Acabo de consultar a la comisión y ella cree que no debe aceptar el agregado que propone el señor diputado por Buenos Aires. Acepta sí su pensamiento y coincide con él, pero le parece que no debe alterar la redacción de su despacho con un artículo que ha de incluirse necesariamente en la ley especial orgánica de los establecimientos de educación y reforma que deben

ser creados como consecuencia de este despacho.

La comisión despachará complacida un proyecto del señor diputado por el cual se establezca el tipo, la organización y el régimen de trabajo de las casas de educación y reforma de los niños en peligro, de mala conducta o criminales; y piensa que será necesario presentarlo.

Sr. Sánchez Sorondo. — Pido la palabra.

Desearía que la comisión me informara sobre el criterio financiero y técnico que ha tenido para aconsejar a la cámara la sanción de este artículo 22, que autoriza al poder ejecutivo a invertir hasta 10 millones de pesos en la construcción de escuelas especiales en la capital, provincias y territorios nacionales. Desearía saber si la comisión se ha fundado en estudios que le hayan permitido establecer esta suma como necesaria para las obras proyectadas.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

Antes de contestar al señor diputado pido se lea el artículo tal cual lo ha despachado la comisión, porque en la orden del día ha habido una omisión.

—Se lee:

"Artículo 22. — Autorízase al poder ejecutivo a invertir hasta la suma de diez millones de pesos moneda nacional para la construcción, en la capital y en las provincias y territorios nacionales, de escuelas especiales para los menores exstos o abandonados y para la detención preventiva de los menores delinquentes o de mala conducta, y la construcción de reformatorios para menores delinquentes o de mala conducta, con imputación a la presente ley."

Sr. Melo. — Yo esperaba, señor presidente, que este despacho viniese a la cámara al mismo tiempo que uno de la comisión de presupuesto sobre un proyecto que tiene a su consideración desde hace tiempo, presentado por el diputado que habla y por los señores diputados por Santa Fe, doctores Mosca y Ferrarotti. En él se había previsto la financiación de este despacho, creándose un impuesto especial sobre las cantidades de dinero que salen de la república sin que se adquieran con ellas y se introduzcan a ella especies

equivalentes. Los extranjeros que vivían fondos a Europa para emplearlos allí en acciones, en compra de bienes inmuebles, para acumularlos en las arcas de los bancos, para sostener a terceros, los argentinos que viven en Europa y no vienen a nuestro país sino cada tantos años, que viven del trabajo que aquí se realiza, las grandes compañías extranjeras que sacan del país pingües ganancias, como por ejemplo, las compañías hipotecarias, pagarán al país lo necesario para crear estos establecimientos de educación y de reforma de los menores, que en muchos casos están abandonados o en peligro moral, como consecuencia de la dura situación creada por la grande industria en la república o por la especulación sobre la tierra y los objetos indispensables para la vida. Que el capitalismo y la especulación sin escrúpulos reparen los males que causan, que los que olvidan el país, y no sufren la lucha tan ardua por la cultura que mantenemos, se acuerden cuando reciban en Europa sus rentas para costear sus ocios que ellas son trabajo humano, a veces el último esfuerzo de la miseria.

De manera que la pregunta que formula el señor diputado por Buenos Aires, hubiera quedado satisfecha con el despacho de la comisión de presupuestos a que me refiero.

Y agregaré que lo que deseábamos los autores de ese proyecto, no era ni siquiera que la comisión lo hiciese suyo, sino que nos diere si era compatible el sistema de impuestos que ella pensaba adoptar y que ha de darnos los recursos, para atender a los gastos generales de la nación.

En tanto que ese despacho se formula, o si fuese adverso, es forzoso sacar los recursos que esta ley exige de rentas generales como lo proyecta la comisión de legislación en este artículo.

Ahora premitame el señor diputado por Buenos Aires que conteste su pregunta con esta otra sencilla: ¿Cree el señor diputado que la suma de diez millones de pesos es una cantidad exagerada para crear esta clase de establecimientos, cuando en la sola capital federal existen cerca de doce mil meno-

res abandonados, en peligro moral o delinquentes?

Sr. Sánchez Sorondo. — ¿El señor diputado me pregunta?

Sr. Melo. — Le pregunto con el mismo derecho con que el señor diputado me ha preguntado.

Sr. Sánchez Sorondo. — Voy a contestarle.

Desde luego, señor presidente, las palabras que acaba de pronunciar el señor diputado por la capital, demuestran que este artículo debe ser rechazado in limine.

Sr. Melo. — ¿Con qué se van a costear entonces los establecimientos de educación y de reforma?

Sr. Sánchez Sorondo. — A una pregunta formulada con toda sencillez...

Sr. Melo. — Ya se ve. Las preguntas del señor diputado son siempre muy completas.

Sr. Sánchez Sorondo. — Desde que la comisión aconseja a la cámara que se autorice al poder ejecutivo a gastar diez millones de pesos en la construcción de reformatorios para vagos, me parecía natural que, por lo menos, los señores firmantes del despacho hubieran estudiado siquiera el lugar dónde iban a establecerse esos reformatorios, qué tipo sería el que debía adoptarse, qué capacidad habrían de tener y los demás detalles consiguientes.

Yo creía que el señor diputado por la capital inmediatamente iba a decir: sí, señor diputado: se necesitan tantos reformatorios, se van a instalar en tales partes, se han estudiado los presupuestos y van a costar tanto. Esa era la respuesta que, a mi entender, debió darse a la pregunta que yo formulé con toda seriedad a la comisión; pero advierto que ella no ha tenido en vista absolutamente nada de esto, sino otro proyecto que parece haber estado encadenado en su destino con este de la comisión, y que la de presupuesto por razones que ella se sabe no ha despachado aún.

De manera que el señor diputado en realidad no me ha contestado; pero ha contestado lo suficiente como para que la cámara rechace esta autorización para invertir diez millones de pesos que se acuerdan al poder ejecutivo

En cuanto a la pregunta que el señor diputado me formula, de que si yo creo que bastan diez millones de pesos para la construcción de estos establecimientos, le diré que no es posible contestarla, porque todo dependerá del número de los establecimientos, de su capacidad, de su tipo, de su ubicación y de las otras circunstancias que no escaparán a una inteligencia tan penetrante y sutil como la del señor diputado por la capital.

En síntesis, señor presidente, yo creo que la cámara no puede votar esta autorización para gastar diez millones de pesos y que lo que procede es, o que la comisión de presupuesto en el despacho que formulará sobre la ley de gastos que ha de regir el año próximo, tome en cuenta esta ley si es que obtiene la sanción del senado y provea los fondos que demande su ejecución, o esperar a que el poder ejecutivo haga los estudios del caso y venga a pedir al congreso concretamente la suma que necesite para la creación de estos establecimientos.

Sr. Molina. — Pido la palabra.

Necesito contestar al señor miembro informante respecto al proyecto pendiente ante la comisión de presupuesto que da los fondos para estos reformatorios.

La comisión no ha podido despachar ese proyecto, entre otras razones, porque existe una ley de la nación que impide votar fondos si no existen previamente los planos ni los estudios técnicos necesarios.

Yo creo que todo podría conciliarse si reemplazáramos el artículo de la comisión con otro que dijera que el poder ejecutivo presentará a la brevedad posible, si se quiere el plan general y los planos para la construcción de todo esto. Entonces estaría el congreso en condiciones de votar las cantidades que fueran necesarias y de aprobar o modificar el plan general. Estas son las razones por qué la comisión de presupuesto no ha podido despacharlo.

Podría contestarle también al señor miembro informante respecto a las fuentes de recursos que él había arbitrado, que ellas están involucradas en el impuesto a la renta en su mayor parte.

De manera que no creemos necesario establecer impuestos especiales para cada obra pública o para cada serie de obras públicas que se discuta. Creemos en general, que ese es un mal sistema financiero, que las obras públicas como todos los gastos de la nación, deben surgir del tesoro común, de las rentas generales, y que todas estas administraciones y percepciones especiales, no hacen sino complicar la administración.

Por otras consideraciones, yo le propongo a la comisión que modifique su artículo en el sentido de que se autorice al poder ejecutivo para presentar un plan general y los planos para la construcción etc., y lo demás como está redactado en el artículo. De esta manera salvaríamos la disposición de una ley. Haríamos algo sumamente razonable — no digo que no lo sea la que ha propuesto la comisión — pero tiene un impedimento legal y podríamos concluir la discusión de esta ley.

Sr. Carrasco. — El poder ejecutivo "presentará", en lugar de "autorizará". Tal vez sea mejor en lugar de "autorizase" que no necesita el poder ejecutivo, una forma conminatoria. El poder ejecutivo presentará en el término de seis meses de sancionada esta ley los planos, etc., etc.

Sr. Molina. — Yo no le pondría limitación al tiempo, porque no podemos saber si será mayor o menor el tiempo que necesite. Sencillamente yo desearía que el poder ejecutivo presentara el plan general para la construcción de todo esto, en la capital, en las provincias y territorios nacionales, etc.

Sr. Melo. — Yo le contestaría al señor presidente de la comisión de presupuesto que las leyes se abrogan por otras leyes y que los artículos de una ley se derogan por los de otra ley. De manera que no tratándose de un obstáculo constitucional que no me puede invocar el señor presidente de la comisión de presupuesto en este caso, se puede en un proyecto de ley adoptar disposiciones especiales derogatorias de prescripciones de otras leyes.

Sr. Molina. — ¿Y por qué el señor diputado, cuando se discutió la ley De-narchi, la votó en vez de combatirla?

Sr. Melo. — No, señor. El señor diputado sabe lo que pasa en la cámara. No se puede estar siempre molestando a la cámara con oposiciones: tengo siempre el remordimiento de haber dejado a veces pasar en silencio votando en contra o no votando disposiciones que me parecen malas, porque observando todo aquello que me parece defectuoso, la cámara concluiría por no escucharme. De modo que no me puede decir el señor diputado que todas aquellas leyes que se han sancionado con mi abstención o con mi silencio, sean leyes con las cuales yo esté conforme.

Sr. Molina. — Es una ley que no puede dejar de ser observada por ninguna de las cámaras mientras no se derogue, evidentemente nosotros tenemos un medio de modificarlas o de derogar la ley Demarchi, pero mientras ella no se derogue, las comisiones de ambas cámaras han de sujetarse a sus disposiciones que, por otra parte, son excelentes puesto que impiden que se voten fondos para obras públicas cuyos planos o presupuestos no han sido ejecutados.

Sr. Melo. — No estoy de acuerdo con el señor diputado. Pero dejemos de lado esta discusión que nos llevaría demasiado lejos.

El obstáculo que el señor diputado encuentra respecto de que va incluido el impuesto proyectado puede afectar el impuesto a la renta, puede ser un argumento, pero faltaba que la comisión de presupuesto nos lo dijera. Lo cierto es que el impuesto establecido en el proyecto es excelente: grava el capitalismo, la especulación, el ausentismo en beneficio de los niños desamparados, que representan en su mayor parte una llaga social causada en parte por la acción de la especulación y del capitalismo es una obra moral.

En cuanto a que la comuna debiera presentar planos o proyectos para reformatorios, es una rara exigencia — buena para cuando venga la ley especial orgánica de ellos. El ejecutivo nos traerá todo eso.

La comisión no tiene ahora inconveniente en aceptar la modificación

propuesta por el señor diputado por la capital, doctor Molina, que facilita la sanción de este artículo combatido por el señor diputado Sánchez Sorondo, pues si este artículo no se sancionara la ley quedaría en el aire porque no tendría financiación alguna ni medio de ponerse en práctica.

Por mi parte, individualmente, no aceptaría la proposición; pero como la comisión la acepta, como presidente de ella, debo inclinarme. No la aceptaría porque tenemos la obligación inmediata de construir estos establecimientos y con la modificación propuesta no se construirán y los niños continuarán abandonados entre tanto.

Sr. Molina. — No hay tanto apuro en autorizar la inversión de fondos, porque antes habrá que preparar los planos y presupuestos en lo que se invertirá, sin duda, algún tiempo.

Sr. Caracoche. — Pido la palabra.

Voy a insistir sobre la proposición al agregado que he propuesto al artículo que se va a votar. Lamento que la comisión no lo haya aceptado y no lo considere eficaz, porque a mí, al contrario, me parece muy oportuno.

La mejor manera de que estos reformatorios realicen su misión es fomentar el trabajo. El recurso mejor, más eficaz, más sabio y más influyente es el trabajo efectivo, bien ordenado, perfectamente sistemático y didáctico y, que, además, es sano, es higiénico y es productivo. He aquí por qué he agregado: para ser partes en el beneficio de ese trabajo. Y cuando contemplamos lo que ocurre respecto de nuestro régimen carcelario, donde el atraso es tan profundo y tan lamentable, yo no sé cómo vamos a caracterizar ahora en este artículo, esta nueva senda.

Sr. Melo. — La comisión acepta. Como ha aceptado otras modificaciones, acepta ésta. No hay ningún inconveniente en que quede incorporado al despacho en la forma que va a votarlo la cámara.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se va a leer el artículo en la forma en que se va a votar.

Sr. Secretario (Zambrano). — El poder ejecutivo presentará el plan general para la construcción en la capi-

tal y en las provincias y territorios nacionales, de escuelas especiales para los menores expuestos o abandonados y para la detención preventiva de los menores delincuentes o de mala conducta, con imputación a la presente ley.

En estas escuelas y reformatorios regirá el trabajo de talleres y agrícola como principal elemento educativo de los menores reclusos, quienes serán partes en el beneficio pecuniario de esos trabajos. Las colonias-escuelas y las colonias-reformatorios ubicadas cerca de las ciudades o en pleno campo serán el tipo preferido de estas casas de prevención y reforma de los menores.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Es el artículo 22, que se va a votar como despacho de la comisión.

— Se vota el artículo 22, en la forma leída, y es aprobado.

— Se da por aprobado el resto del proyecto.

Sr. Presidente (Goyeneche). — queda sancionado el despacho de la comisión.

16

INDICACIONES PENDIENTES

Sr. Presidente (Goyeneche). — En consideración el despacho de la comisión de hacienda acerca de la modificación de la carta orgánica del Banco Hipotecario Nacional.

Sr. Sánchez de Bustamante. — Hago moción para que se levante la sesión.

Sr. de Tomaso. — Pido la palabra.

La comisión ha dicho, señor presidente, que consideraba la orden del día 86 como parte integrante de la orden del día número 56, y la cámara tiene que aceptar esto, porque es con ese pensamiento que hemos trabajado, porque es ese pensamiento, — que ha conocido en todo momento el señor diputado Agote, que ha ido frecuentemente a la comisión a interesarse por este proyecto — que nosotros hemos hecho el despacho, y que la cámara tratará si entra a considerar ya rápidamente, esta orden del día número 86.

Sr. Sánchez de Bustamante. — He hecho moción de levantar la sesión.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Hago moción de orden. Se va a votar.

Sr. de Tomaso. — Pido la palabra.

Es para hacer otra moción, que es indispensable que la cámara conozca, a fin de que pueda votarla, porque si se aprueba la del señor diputado por Jujuy, los señores diputados se irán: que se trate la orden del día número 86 mañana, como primer asunto, antes del asunto del censo, que tiene preferencia de acuerdo con la resolución de la honorable cámara.

Sr. Araya. — Es un solo asunto.

Sr. de Tomaso. — Yo preferiría trabajar ahora.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Permitanme los señores diputados. La moción de levantar la sesión es previa a toda otra. Si el señor diputado la quiere postergar en tanto se vota la indicación...

Sr. Sánchez de Bustamante. — No tengo inconveniente.

Sr. Ferrarotti. — La cámara había resuelto tratar con preferencia el asunto del Banco Hipotecario.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Exactamente, señor diputado.

Sr. Avellaneda (M. A.) — La reforma de la carta orgánica del banco hipotecario nacional tenía preferencia sobre el asunto que acaba de sancionar la honorable cámara y no fué tratada en su oportunidad debido a que el miembro informante de la comisión, doctor Martínez Zuviria, se encontraba enfermo.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Tiene razón el señor diputado.

Sr. Agote. — Para conciliar todas las opiniones, propondría tratáramos de inmediato el asunto del Banco Hipotecario Nacional, y terminado éste se entraría inmediatamente a considerar el despacho complementario de esta ley, porque el señor diputado Bunge había hecho moción conjunta.

Sr. Sánchez de Bustamante. — Dado que la discusión se complica, retiro mi moción de levantar la sesión.

Varios señores diputados. — ¡No!

— Se vota y es aprobada.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Invito a los señores diputados a levantar la sesión.

— Son las 8 p. m.